

páginas

PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Bajo *todos los fuegos*

PERIODISMO Y NUEVAS GUERRAS EN COLOMBIA

Una revista de

FLIP FUNDACIÓN PARA
LA LIBERTAD
DE PRENSA



¿Eres docente y quieres que tus estudiantes creen contenidos e información verificada, pero no sabes cómo guiarlos?

El diplomado **Herramientas PARA LEER** el **MUNDO** es para ti.



Buscamos maestro/a:



De primaria o secundaria, de cualquier asignatura



Interesado/a en crear un medio de comunicación escolar



Comprometido/a con formar audiencias informadas y críticas con la información



Dispuesto/a a cursar un programa gratuito y certificarse con la Pontificia Universidad Javeriana

En su tercera edición, este diplomado en educación mediática te ofrecerá las **herramientas necesarias para navegar en la era digital y aplicar estrategias periodísticas en el aula.**

¡Descubre más sobre nuestra convocatoria escaneando el código QR!



FOTO: Gabriel Linares

Elizabeth Lozano, periodista local, creció en las riveras del río Cauca en épocas en las que "los peces llovían como tornados". Su historia reciente cuenta cómo hacen monitoreo comunitario para proteger los espejos de agua de la minería, en el Bajo Cauca Antioqueño.

páginas

PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN
Y COORDINACIÓN EDITORIAL

Jonathan Bock Ruiz
César Paredes
Daniel Chaparro Díaz
Juan Pablo Madrid-Malo
María Cristina Hernández Capdevilla
Natalia Borrero Morales

INVESTIGACIÓN Y TEXTOS

Ángela María Agudelo Urrego
César Paredes
Cristian Mora Jiménez
Daniel Chaparro Díaz
Daniela Ospina Noriega
Felipe Rojas Riaño
Ingrid Ramírez Fuquen
Jonathan Bock Ruiz
Juan Diego Cárdenas

INVITADO

César Rojas Ángel

EDICIÓN

Jonathan Bock Ruiz

CORRECCIÓN DE ESTILO

DÉCIMA EDICIÓN
Febrero 2025
Bogotá D.C.

EN PORTADA:
Isabella Londoño
@isabellalondono.art

COLLAGES

Ángela María Agudelo Urrego
Cristian Mora Jiménez
María Cristina Hernández Capdevilla

ILUSTRACIONES

Isabella Londoño
Rowena Neme

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN
Y APOYO GRÁFICO

Laura Merchán Calderón
Luisa Burgos Marín

IMPRESIÓN

PLG Publicidad y Digital SAS

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO: Ana Cristina Restrepo · DIRECTOR EJECUTIVO: Jonathan Bock Ruiz
SUBDIRECTOR PROGRAMÁTICO: César Paredes · ASESOR DE DIRECCIÓN: Daniel Chaparro Díaz
COORDINADORA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Natalia Borrero Morales
ASESORA DE DIRECCIÓN PARA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DIGITAL: Luisa Fernanda Isaza
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mireya Luque Triana · Daniela Rosero Prieto · Diana Herrera Rodríguez · Diana Carolina Pinto
Michael Alvarado González · Nubia Cárdenas · ÁREA DE PROYECTOS: Diana Santos Cubides · Cinthya Osorio Ortiz
CENTRO DE ESTUDIOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Juan Pablo Madrid-Malo · Alexandra Molina Trujillo
Esteban Sánchez Molina · José Alberto Cubillos · Juan Diego Cárdenas · Sofía Luna Siachoque
CONSONANTE: Ángela Martín · Isabela Porras Alzate · Alejandra Duque · Angy Alvarado · Camila Bolívar Manzano
Gabriel Linares López · Hugo Cárdenas González · Ivonne Arroyo Mercado · Laura Vanesa Barrera · Lorena Sánchez Contreras
Manuela Saldarriaga Hernández · María Paula Sierra · Natalia Prieto Caballero · Nicole Bravo García · Sirley Muñoz Murillo · Valeria Ortiz Tabares
ÁREA LEGAL Y DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS: Natalia López López · Andrés Peña Bernal · Ariana Gutiérrez · Daniela Ospina Noriega
Felipe Rojas Riaño · Ingrid Ramírez Fuquen · Jorge Blanco Sarmiento · Lina Velásquez Veloza · Yesika Forero Sanchez
EQUIPO CREATIVO Y DE COMUNICACIONES: María Cristina Hernández Capdevilla · Ángela María Agudelo Urrego
Cristian Mora Jiménez · Laura Merchán Calderón · Mónica Alejandra Leguizamón · Tatiana Vásquez Pérez



Contenido

04



18



28



22



La censura de la nueva guerra | *pág. 04*

Disparos de silencio por muchos frentes | *pág. 12*

El laberinto de la desprotección y una nueva guerra | *pág. 18*

Violencia contra periodistas en el 2024: un año letal y el más crítico de la última década | *pág. 22*

Asesinatos a periodistas: el retorno de la censura del fuego | *pág. 28*

Un campo que amanece sin la voz de Mardonio | *pág. 29*

Una muerte, muchos silencios: el asesinato de Jaime Vásquez | *pág. 32*

Jorge Méndez: la imagen diferente que amordazaron en La Gabarra | *pág. 35*

BAJO TODOS LOS FUEGOS: LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN EN MEDIO DE UN NUEVO
CAPÍTULO DE LA GUERRA EN COLOMBIA

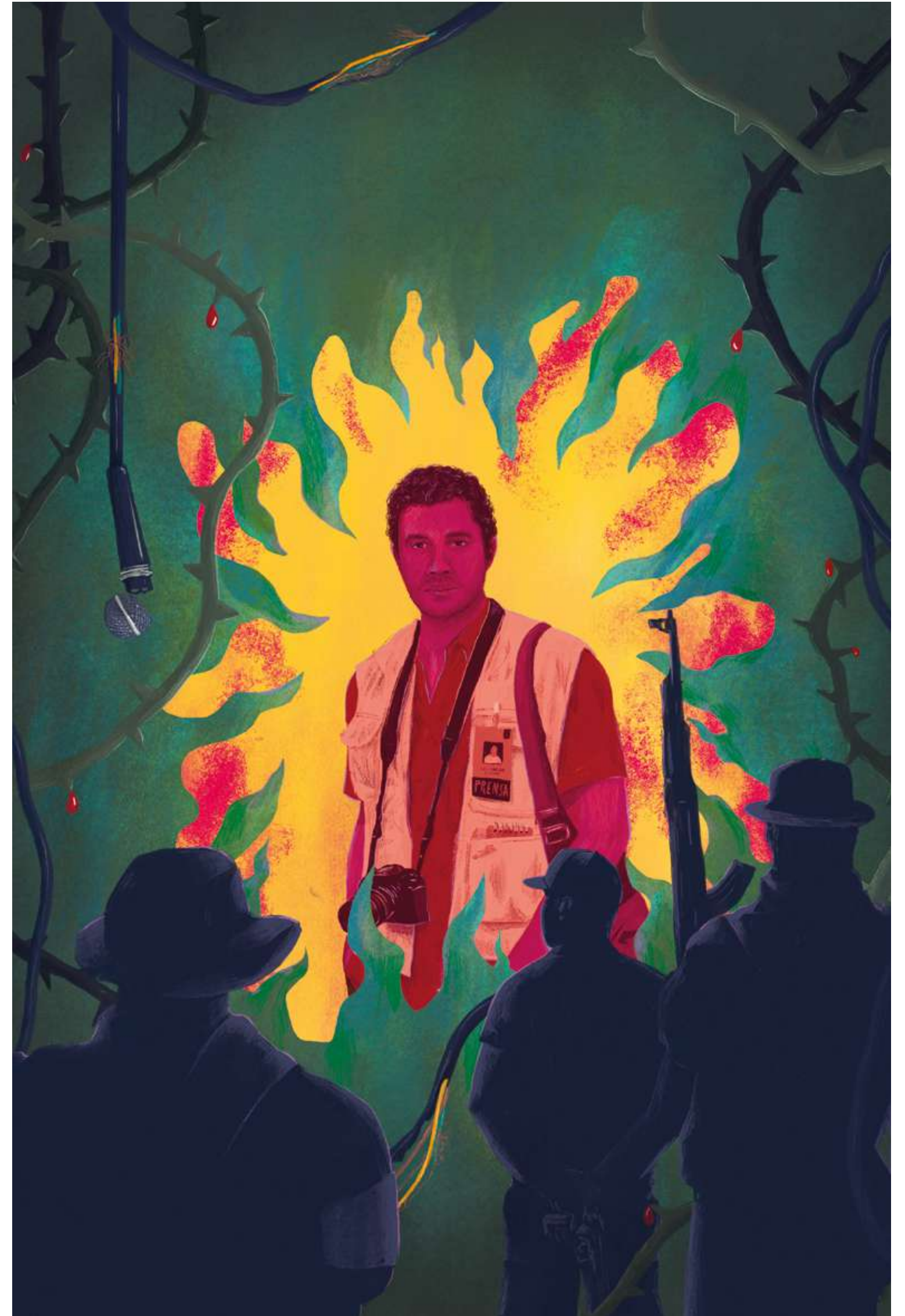
La censura de la **nueva** guerra

Por: Juan Diego Cárdenas
y César Paredes, FLIP.
Ilustraciones: Isabella Londoño.

El periodismo en Colombia enfrenta uno de sus momentos de mayor riesgo. Las cifras muestran el escenario más violento desde los años previos a la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La emergencia de nuevos grupos armados ilegales y la consecuente reconfiguración del conflicto ha intensificado la violencia contra periodistas, quienes en 2024 fueron objeto de amenazas, desplazamientos, extorsiones y asesinatos, entre otras agresiones. En el año que pasó aumentaron en más del 50% los ataques contra la prensa perpetrados por actores ilegales. Este artículo analiza la gravedad del asunto en cinco departamentos clave, donde ejercer el periodismo se ha convertido en una labor de altísimo riesgo y la libertad de expresión está profundamente comprometida.

El recrudecimiento de la guerra en Colombia ha vuelto a poner al periodismo en el medio de la confrontación armada. Los grupos ilegales han buscado hacer de la información un botín de guerra a través de viejas estrategias que fueron utilizadas en otras etapas del conflicto en Colombia. Asesinatos, desplazamientos, amenazas, extorsiones, secuestros, entre otras formas de violencia, hacen parte del intento por controlar la información, posicionar su propaganda y, en últimas, demostrar su poderío frente a grupos rivales o frente a la misma población civil.

Los casos documentados por la FLIP durante el 2024 dan cuenta de un aumento de las cifras que deja el panorama más violento contra el periodismo en la última década. Tres periodistas fueron asesinados como represalia por su trabajo: Jaime Vásquez, veedor ciudadano y periodista de la ciudad de Cúcuta asesinado en abril pasado en una coyuntura criminal altamente atomizada, y Mardonio Mejía, un veterano periodista que durante décadas fue la voz más relevante del norte de Sucre.



Además, Jorge Méndez, periodista comunitario del Catatumbo, Norte de Santander, también fue asesinado. Aunque la investigación sobre su muerte está en una fase preliminar, la hipótesis principal es que el crimen estuvo motivado por su trabajo.

El aumento del desplazamiento forzado también es un síntoma de la violencia contra los y las periodistas en el país. Mientras que en 2023 la FLIP documentó 2 casos de este tipo, en 2024 esta cifra subió a 20, aumentando un 900%. Este es el contexto de territorios como Caquetá y Arauca, donde el incremento de las confrontaciones entre dos o más grupos han provocado tácticas de violencia en las que los actores armados muestran con mano dura las consecuencias de no acogerse a las reglas de control sobre la información que se han levantado en medio de los conflictos regionales.

En ese mismo contexto, los grupos armados ilegales también han intensificado sus amenazas en contra de las y los periodistas. En 2023, estos actores fueron los responsables de 64 hechos de ese tipo en el país, cifra que aumentó a 122 en 2024, lo que representa un aumento del 90.62% frente al año anterior. Departamentos como Norte de Santander, Huila y Putumayo se han convertido en el epicentro de estas agresiones en donde los grupos armados emplean tácticas más directas contra la prensa. Este escenario evidencia no solo un creciente desdén hacia las posibles consecuencias de sus acciones, sino también la limitada capacidad del Estado para responder de manera efectiva.

Este contexto ha conducido a los actores ilegales a configurarse como uno de los protagonistas en la violencia contra la prensa, doblando su participación frente a periodos pasados. En 2023, la FLIP contabilizó 470 agresiones en contra de periodistas en todo el país. De ese número, 81 fueron cometidas por actores al margen de la ley: delincuentes comunes, bandas criminales y actores postparamilitares, disidencias y guerrilleros. En 2024, la cifra ascendió a 530 agresiones, de las cuales 122 fueron cometidas por grupos criminales o delincuenciales, lo que representó un aumento del 51.8% en la participación de estos actores en la violencia contra la prensa con respecto al 2023.

Los ataques contra la prensa, que antes seguían esquemas de control más centralizados, han dado lugar a métodos de violencia más diversificados e impredecibles. Esta metamorfosis del conflicto no solo incrementa los riesgos para las y los comunicadores desde múltiples flancos, también amplifica el impacto sobre la sociedad: las comunidades quedan silenciadas, desprovistas de información sobre los problemas que las aquejan y se aleja la posibilidad de construir una ciudadanía territorial fuerte.

De acuerdo con Fernando Ramírez, editor de noticias de La Patria y expresidente del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta atomización de la guerra no está caracterizada por motivaciones o tácticas necesariamente nuevas. Más bien, responde a la proyección de nuevos conflictos regionales y sus características propias.

“Antes, cuando había un grupo dominante, los periodistas más o menos aprendían a sobrevivir y a casi que caminar sobre cáscaras de huevo para tratar de hacer el mejor periodismo en ese escenario. Pero cuando hay varios grupos, cuando hay tantos elementos, esto complica la vida para el periodista porque es más difícil saber cómo proceder”, dice Ramírez.

Norte de Santander, Arauca, Huila, Caquetá y Putumayo son los cinco departamentos donde las agresiones contra los periodistas documentadas en 2024 alcanzaron niveles críticos. En este recorrido, examinamos las distintas formas que ha tomado la violencia contra la prensa y profundizamos en sus impactos sobre la libertad de expresión.

CÚCUTA: LA INFORMACIÓN BAJO EL FUEGO DE LA FRONTERA

La mañana del domingo 14 de abril de 2024, Jaime Vásquez salió de su casa en el barrio La Ceiba, en Cúcuta, Norte de Santander. Desde allí, se dirigió a una iglesia cercana. Atendió a la eucaristía y posteriormente caminó hasta un local de venta de pasteles en La Riviera, a poca distancia de donde se encontraba. Minutos después, dos sicarios en moto que le habían seguido la pista, llegaron hasta el establecimiento y dispararon contra él, acabando con su vida en cuestión de segundos.

Previo a su asesinato, Vásquez se había convertido en uno de los investigadores y veedores de mayor importancia en la ciudad. A través de sus páginas de X (antes Twitter) y Facebook, en la que contaba con más de 72 mil seguidores, Vásquez informaba sobre asuntos de interés público relacionados con el desfaldo del erario y la corrupción en la administración municipal de Cúcuta. Su labor ya le había costado el perfilamiento y las amenazas de parte de actores ilegales, un hecho que

Vásquez también había denunciado y que, además de contar con un esquema de protección, no evitó que fuera asesinado.

En 2024, Norte de Santander fue el departamento más peligroso para ser periodista en Colombia. En ese periodo se registraron 59 agresiones contra la prensa, lo que representó un aumento del 229% en comparación con 2023, cuando se documentaron 17 casos. De estos casos, 52 ocurrieron en Cúcuta, lo que la convierte en la más peligrosa de las ciudades intermedias del país, seguida por Medellín con 14 casos y superada solo por Bogotá, la capital, con 120. En particular, 18 de los ataques en Cúcuta fueron perpetrados por actores criminales en un contexto marcado por la presencia de al menos 20 estructuras que operan en la ciudad.

Además del asesinato de Vásquez, varios grupos y líderes criminales han incurrido en otras formas de violencia con el interés de hacer cumplir sus demandas a los periodistas. Según un comunicador local que pidió la reserva de su nombre para preservar su seguridad, organizaciones como AK-47, Los Porras y Los Manzaneros tienen especial interés en instrumentalizar a los medios para que sirvan de cajas de resonancia de su actividad ilícita. Estas disputas convierten a los medios en otro campo de batalla en la lucha por el control de las rentas ilegales en la ciudad. “Les gusta entregarnos muchos videos donde envían amenazas a otros grupos. Nos presionan si no los publicamos”, dijo.

Así mismo, de acuerdo con el reporte de dos periodistas que decidieron permanecer anónimos por las amenazas en su contra, líderes de grupos criminales se han aproximado a los medios locales con el interés de utilizarlos como una plataforma para limpiar su nombre o enviar amenazas a otros grupos. Un ejemplo de esto fue el caso de Jayson Omar Pabón Garavito, alias ‘Pepino’ y presunto líder de Los Manzaneros, quien solicitó ser entrevistado a un medio local con la finalidad de aclarar su participación en la organización y su confrontación con una estructura rival, Los Porras.

Esta presión no solo pone en riesgo a las y los periodistas sino a la independencia del ejercicio periodístico, pues la agenda informativa está sujeta a los intereses de estas organizaciones, que suelen estar en oposición entre sí. Como resultado, grupos como Los Porras han difundido planes de asesinato donde declaran a varios reporteros como objetivo militar por la publicación de este tipo de contenidos, lo que ha provocado un ambiente de autocensura y ha obligado a varios comunicadores a desplazarse de manera forzada. De la misma manera, esto les ha puesto bajo la estigmatización de las autoridades de policía que, según comentaron varios periodistas a la FLIP, les han

catalogado de ser “jefes de prensa” de parte de estos grupos, aumentando el riesgo sobre su oficio y su vida.

Por otro lado, según comentaron los dos periodistas a la FLIP, los grupos criminales también han establecido restricciones sobre los temas que pueden ser cubiertos por la prensa. Las organizaciones criminales han vetado la realización de reportajes o contenidos sobre cárceles, economías ilícitas y seguridad, lo que ha limitado el ejercicio periodístico para informar sobre asuntos de urgencia en la ciudad.

La situación ha obligado a muchos comunicadores a enfocarse en temas considerados menos riesgosos, transformando por completo la agenda local. El periodista Cristian Herrera resume el impacto de estas dinámicas al reflexionar sobre el asesinato de Vásquez: “ahora hablamos de temas de barrio o que el alcalde no arregla una cancha”, con lo que da a entender que el costo es muy alto y lo que deja la muerte de un periodista es el silencio.

Por otro lado, la reciente terminación de la tregua entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las extintas Farc en la región del Catatumbo ha intensificado la violencia en esta zona, desencadenando una crisis humanitaria que, según la Defensoría del Pueblo, habría dejado aproximadamente 80 muertos al cierre de este texto, incluidos cuatro excombatientes de las Farc, y más de 36.000 personas desplazadas*. Esta escalada no solo pone en riesgo a la población civil, sino que también asfixia la libertad de expresión. Con los periodistas atrapados entre las confrontaciones y las amenazas, se extiende el vacío informativo en la región.

ARAUCA: EL PERIODISMO EN UN DEPARTAMENTO EN VILO

A finales de enero de 2022, el comienzo de una nueva guerra llegaba a Arauca, un departamento ubicado al oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela. La tregua que por varios años había mantenido a raya el conflicto entre el Frente de Guerra Oriental (FGO) del ELN y los frentes 10 y 28 de la Farc—ahora bajo la sombrilla del Comando

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES HAN VETADO LA REALIZACIÓN DE REPORTAJES O CONTENIDOS SOBRE CÁRCELES, ECONOMÍAS ILÍCITAS Y SEGURIDAD

* Fecha de corte: 23 de enero de 2025.

Conjunto del Oriente (CCO) del EMC—, llegaba a su fin. Con la reactivación de la disputa, cada ejército empezó a movilizar sus estrategias. Entre ellas, los medios locales les resultaron atractivos para poner en marcha su agenda de guerra. El mensaje era claro: colaborar o morir. Ante el inminente riesgo, cuatro periodistas se vieron obligados a desplazarse a Bogotá, lo que apuntaló un nuevo episodio de la violencia contra la libertad de prensa en Arauca.

En 2024, de las 45 agresiones a la prensa registradas en el departamento, **29 fueron atribuidas por alguno de los dos actores armados que tienen presencia en el departamento.**

Según Emiro Goyeneche, un periodista local que ha sido blanco de amenazas y de desplazamiento, cada uno de los actores ha escogido un repertorio de violencia contra la prensa en medio del conflicto. El ELN recurre principalmente a la estigmatización y a imponer lineamientos para la cobertura informativa. Esto es una muestra del control que han consolidado sobre el EMC en municipios como Saravena, Arauca y Arauquita.

Por otro lado, las disidencias emplean tácticas más agresivas, como amenazas directas, y buscan instrumentalizar a los medios para promover su narrativa de control territorial y social.

LAS DISIDENCIAS EMPLEAN
TÁCTICAS MÁS AGRESIVAS,
COMO AMENAZAS DIRECTAS, Y
BUSCAN INSTRUMENTALIZAR A
LOS MEDIOS PARA PROMOVER
SU NARRATIVA DE
CONTROL TERRITORIAL
Y SOCIAL.

su lugar al ELN. En este contexto, la FLIP registró 16 amenazas cometidas por las disidencias en contextos de cubrimiento sobre la situación de seguridad en el departamento, donde los agresores señalaban a los periodistas de ser colaboradores del ELN.

“Las [disidencias de las] Farc nos amenazan porque responde a una pérdida de control político y territorial en Arauca. Quieren hacerse sentir”, dijo un periodista del departamento que habló bajo condición de anonimato. “Nadie publica algo de las [disidencias de las] Farc a menos de que lo amenacen, pero eso nos pone bajo la mira del ELN”, añadió. En 2024, de las 45 agresiones a la prensa registradas en el departamento, 22 fueron atribuidas por alguno de los dos actores armados que tienen presencia en Arauca.

Al igual que en Norte de Santander, la presión sobre el ecosistema mediático le quita oxígeno a la independencia de los medios locales, que cada vez informan menos sobre la situación en el departamento. Por otra parte, estos desplazamientos generan impactos emocionales que son pasados por alto la mayoría de las veces. Producto de estas heridas, algunas voces de los periodistas se silencian, otros tienen que buscar estrategias para poder contar lo que ocurre, pero en todo caso, la libertad de expresión se reduce.

Actualmente, aunque el ELN anunció la reactivación de las negociaciones de paz con el gobierno en noviembre de 2024, tras la suspensión de los diálogos por un atentado de la guerrilla en ese departamento, aún no se ha establecido una nueva mesa de conversación. Mientras tanto, ni el EMC ni el gobierno han planteado medidas para un acercamiento entre las partes.

CITADOS A DECLARAR: EL PASO DE LA GUERRA EN HUILA

A finales de 2023, nueve periodistas en Algeciras, Huila, un departamento ubicado entre la región andina y el suroriente, recibieron un mensaje. Todos tenían la misma instrucción: debían presentarse ante miembros del Bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura disidente del Estado Mayor de Bloques (EMB) al mando de Alexander Díaz, alias ‘Calarcá Córdoba’, con la finalidad de discutir el papel que estaban desempeñando como periodistas. De no cumplir con la cita, se convertirían en objetivo militar.

El escenario no solo provocó que los periodistas suspendieran el cubrimiento de temas locales, sino que impulsó [el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos \(CIDH\)](#) que, a través de la Resolución 88 del 4 de enero de 2024, otorgó medidas cautelares a los nueve periodistas afectados y ordenó al Estado colombiano a poner en marcha una estrategia para proteger la vida de los comunicadores. Sin embargo, la violencia no ha dado tregua. En 2024, los y las periodistas de este departamento sufrieron nueve agresiones en el departamento. Siete

fueron cometidas por actores identificados como miembros de diferentes frentes de las disidencias.

El interés de los disidentes por el departamento proviene de la importancia estratégica que representa, pues conecta a los departamentos de Cauca y Caquetá, que el año pasado registraron 31.844 y 6.590 hectáreas de arbusto de coca cultivadas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El Huila hace parte de una de las principales rutas para el trasiego de cocaína por el Pacífico y la Amazonía.

En este contexto, el EMB ha intentado reafirmar su poder tras imponerse militarmente sobre la Segunda Marquetalia, otro grupo disidente que hace presencia a través de la Columna Móvil Teófilo Forero y que mantiene diálogos con el gobierno desde junio de 2024, según reportó el centro de investigación sobre conflicto Conflict Responses (CORE). De acuerdo con un reporte de esta organización, el EMB aprovechó los mecanismos de gobernanza que las Juntas de Acción Comunal (JAC) habían establecido tras la salida de las extintas Farc y, bajo la amenaza de las armas, sometieron a la sociedad civil a nuevos mecanismos de control.

Aunque el EMB empezó su hostigamiento contra la prensa a través de mensajes, no terminó ahí. Este fue el caso de un periodista que prefirió no dar su nombre por razones de seguridad y quien reportó haber sido secuestrado tras negarse a asistir a las reuniones de los disidentes. Durante su cautiverio, hombres armados lo amenazaron e hicieron preguntas sobre su trabajo, además de indicarle algunas normas sobre la línea narrativa que debía manejar.

De acuerdo con él, otros de sus colegas que accedieron a la fuerza a reunirse con los disidentes recibieron un decálogo con instrucciones para elaborar un cubrimiento adecuado a noticias relacionadas con el conflicto en el departamento. Así se prohibió que se publicara información vinculada con combates y capturas, mientras que se permitió que se informara sobre atentados y otros hechos cometidos por la disidencia en contra de las autoridades.

El periodista, así como sus compañeros, posteriormente fueron dejados en libertad, pero los disidentes les advirtieron lo que podría sucederles si no atendían sus peticiones. Por eso se vieron forzados a desplazarse.

La reconfiguración de la actividad delictiva en departamentos como Huila representa nuevos riesgos para las y los periodistas, pues los actores ilegales operan bajo lógicas locales y descentralizadas sin control de una estructura nacional, como ocurría con las extintas Farc. Esa fragmentación de las estructuras armadas hace impredecibles sus actuaciones. “En cualquier caso, la

gente tiene mucho miedo y eso ha llevado a la censura o a que nos sigan utilizando como carne de cañón”, afirmó otro periodista que prefirió permanecer en el anonimato.

CAQUETÁ: ENTRA EN JUEGO LA EXTORSIÓN A LA PRENSA

Hasta 2024, las agresiones contra la prensa en Caquetá se habían restringido a tácticas antes visitadas por los actores armados. En su mayoría, se trataban de amenazas para publicar o no publicar contenido, especialmente en medio de confrontaciones armadas. En el pasado, si la guerrilla quería publicar algo, podía hacerlo a través de canales propios que había encontrado a lo largo de su actividad en el departamento. Sin embargo, en junio pasado, Ángel, un director de un medio local en Florencia, la capital de Caquetá, y a quien le hemos cambiado el nombre por seguridad, recibió un mensaje que le indicaba que tenía que pagar un cobro para seguir operando. Por primera vez, según recordó el periodista que tiene varios años de experiencia, la extorsión se convertía en una herramienta para someter a la prensa dentro de la dinámica de la guerra en esa región. Lo mismo ocurrió con otros dos directores de medios locales que fueron notificados.

En el departamento del Caquetá, la lucha por el poder entre los grupos disidentes —el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia— ha intensificado el conflicto en el que los métodos de financiamiento juegan un papel clave de la ecuación. En un contexto donde la extorsión a comerciantes ya se ha normalizado como un “costo” para ejercer cualquier actividad económica, la novedad es que ahora los medios de comunicación también sean blanco de estos impuestos ilegales.

“Después de la pandemia se despertó el tema de la extorsión nuevamente con la actividad de las disidencias. Comenzaron los atentados, los combates, ya no entre Ejército y guerrilla, sino entre disidencias. Pero lo que más afecta a toda la sociedad y a todo nivel es la extorsión”, explicó Ángel.

La negativa a pagar extorsiones no solo puso en riesgo la sostenibilidad de su medio, que al igual que otros medios semejantes enfrenta dificultades financieras y depende de la pauta comercial o institucional, sino también la seguridad de su familia. Ángel tuvo que hacer malabares para mantener su operación, mientras enfrentaba

el constante temor a represalias. “Tuvimos que irnos desplazados de la ciudad por un tiempo, pero ante la imposibilidad de salir del país tocó volver, porque aquí está nuestra vida”, agrega. La preocupación, sigue, es que las acciones criminales se están escalando. “Que me envíen algo para presionar la publicación es la primera vez que me pasa. Lo mismo que la extorsión”, indicó.

Además, como en otros territorios, los periodistas locales han denunciado que la presencia de estas nuevas estructuras disidentes, descentralizadas y divididas, dificulta el ejercicio periodístico, pues difumina la capacidad de los comunicadores para identificar cadenas de mando y realizar reportería. “Hay zonas como en San José del Fragua o hacia el Putumayo donde hay cuatro grupos armados. No hay ninguna relación con fuentes de las disidencias que puedan contar qué pasa”, afirmó Ángel.

Por otra parte, los grupos también han optado por mecanismos de gobernanza criminal como el uso de carnés de identificación de la población civil. Según contó un oficial humanitario de la zona a la FLIP, estos mecanismos de vigilancia también incluyen el registro de visitas y la revisión de dispositivos celulares en puestos de control. A través de esta estrategia, los actores armados buscan desarrollar zonas herméticas, donde la información local pasa por sus filtros.

“Hay muchos que queremos saber qué está pasando en el departamento, pero la información está controlada”, dijo el oficial humanitario a la FLIP. El costo de acceder a información de interés público, entonces, pasa por un alto riesgo personal para los periodistas, quienes enfrentan no solo amenazas directas a su vida sino también restricciones económicas y logísticas que limitan su capacidad de informar.

PUTUMAYO: UN CASO DE SECUESTRO

Cuando Édgar y Luis* fueron secuestrados, no les dijeron quienes eran sus captores. Tras horas de camino y con capuchas en la cabeza, fueron llevados hasta una zona desconocida en la selva. Allí los hombres que les habían secuestrado se identificaron como miembros de la Segunda Marquetalia. Les indicaron que su cautiverio respondía a su actividad periodística, pues el medio en el que trabajaban gozaba de prestigio en Mocoa, la capital del departamento, y por ello debían colaborar con los disidentes en

la creación de material a favor del grupo armado. Después de tres días, fueron liberados.

El caso marcó un precedente en las agresiones al ejercicio periodístico, en el que se evidenció una nueva estrategia de los actores armados, que se disponen a utilizar mecanismos de control a los medios y una influencia directa en las agendas narrativas. La situación, además, puso a los periodistas en la mira del grupo rival, el frente Carolina Ramírez del EMC, que los amenazó de muerte si permanecían en el territorio. Ante este escenario, ambos comunicadores se vieron obligados a desplazarse y buscar la protección del Estado.

El secuestro de Édgar y Luis no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón de agresiones que, en los últimos dos años, ha incluido desde presiones para publicar panfletos y amenazas, hasta perfilamientos, desplazamientos y ahora secuestros.

En 2024, la FLIP registró 9 agresiones contra periodistas en Putumayo. Dos fueron cometidas por actores armados.

De acuerdo con un periodista local que no dio su nombre por seguridad, la confrontación entre los dos grupos ha marcado la forma de hacer periodismo en el departamento. Por una parte, ambas organizaciones se han dedicado a intimidar a los periodistas para publicar información a su favor, al igual que en otros departamentos del país. Esta coyuntura provocó que ambos grupos emitieran comunicados desautorizando la información de sus rivales, al tiempo que amenazaban a los periodistas, que terminaron en el medio de una “guerra de panfletos”. Como en casos anteriores, esta intimidación al trabajo periodístico produjo que los periodistas actuaran con sigilo, eligiendo no hacer cubrimientos sobre asuntos de seguridad para no ser señalados.

Por otro lado, según otro periodista que ha sido corresponsal de guerra en el departamento y que prefirió permanecer en el anonimato por su seguridad, la falta de apoyo e información de las autoridades también restringe la posibilidad de realizar cubrimiento sobre temas sensibles en el departamento. “Si las autoridades no se expresan, es muy difícil para nosotros avanzar como periodistas. La información se replica de grandes medios nacionales, pero en lo local, nosotros quedamos de brazos cruzados porque no hay apoyo”, afirmó.

Estos riesgos han llevado a los periodistas locales a adoptar medidas extremas, como la

autocensura, mientras insisten en mantenerse al margen de las confrontaciones armadas. En parte, esto es producto de las nuevas estructuras criminales que sucedieron a las Farc. De acuerdo con uno de los periodistas que habló con la FLIP, el desconocimiento de las cadenas de mando locales ha complejizado los ejercicios de reportería, pues los periodistas sucumben ante la imprevisibilidad de los actores armados. Al tiempo, impera un ambiente de zozobra que ha profundizado un esquema de silencio impuesto, a través del cual la supervivencia de las comunidades y su derecho a estar informadas se pone en grave peligro.

LA PAZ Y EL PERIODISMO: UN FUTURO INCIERTO

Históricamente, la cobertura de la guerra en las regiones ha sido limitada y, en gran medida, quedó en manos de medios nacionales, que abordaban los eventos desde la distancia y con escasa continuidad. Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, surgió una leve esperanza de que las dinámicas del conflicto cambiaran y que los periodistas locales pudieran tener mejores condiciones para su trabajo. Pero ocho años después, esa esperanza ha sido reemplazada por una nueva etapa de incertidumbre y zozobra. Aunque las formas de violencia han evolucionado, los costos para quienes intentan informar desde estas zonas siguen siendo extraordinariamente altos, marcados por las agresiones descritas: amenazas, desplazamientos, secuestros, extorsiones y una creciente autocensura.

A través de estas expresiones, los grupos criminales han intentado convertir el espacio mediático en una herramienta para manipular la narrativa sobre sus actividades criminales, las disputas que mantienen con otros actores o como una estrategia de control social. Como resultado, la prensa se ve impedida para cubrir temas críticos, profundizando el vacío de información a nivel local y afectando la independencia del periodismo. Así mismo, el impacto de prácticas como la extorsión a su actividad se traduce en una amenaza directa a sus modelos de sostenibilidad, lo que pone en riesgo su supervivencia. Además, algunos de ellos enfrentan el desarraigo que nace del desplazamiento, una herida que rompe con el tejido social y comunicativo de los territorios.

Sumado a esto, resulta prioritario que la política de Paz Total –el ambicioso proyecto que pretendía reformular la estrategia de paz y seguridad en el país– diseñe nuevas tácticas de negociación que pongan la defensa de la libertad de expresión en el centro de la discusión. En ese sentido, es vital proponer una visión que garantice la seguridad de los y las periodistas y, en consecuencia, la seguridad de la información como un activo de alto valor en el fortalecimiento democrático y en las

negociaciones que el gobierno ejecute con los grupos armados.

Fernando Ramírez, de La Patria, también enfatiza que el estado actual del conflicto en Colombia requiere esfuerzos coordinados en varios frentes. Esto no solo implica construir un ambiente de respeto por la libertad de expresión en el país, especialmente en el marco de procesos de negociación y fortalecimiento democrático, sino que requiere de un esfuerzo conjunto de medios de comunicación, periodistas y editores para sobrellevar la afectación sobre la información. La cooperación entre medios nacionales y locales es clave para salvaguardar la información y proteger a periodistas.

“Eso se hizo en las peores épocas de la violencia en Caldas, en Arauca, y es una manera de ayudar a la empresa local para que los periodistas no pongan el pecho, porque lo que importa es la información y que la información se conozca”, explica Ramírez.

El papel del Estado también es fundamental. Sin embargo, las iniciativas estatales actuales, lideradas por la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), parecen insuficientes frente a la creciente violencia y deben adaptarse a las nuevas realidades del conflicto.

LA PROTECCIÓN DEBE ESTAR BASADA EN EL CONTEXTO LOCAL Y LA RESPUESTA OPORTUNA DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE AGRESIONES A LOS PERIODISTAS PODRÍA SER DISUASORIA DE OTRAS AGRESIONES.

Mientras tanto, el resultado es un aislamiento informativo que afecta profundamente las zonas de frontera, el sur y en general los departamentos donde hay intereses estratégicos de extracción de rentas criminales. Las voces de las comunidades quedan silenciadas y los intentos por acceder a información enfrentan obstáculos infranqueables. Este vacío informativo no solo desconecta regiones enteras, sino que también debilita aún más la construcción de un futuro en paz. ♦

* Los nombres fueron cambiados por seguridad de los periodistas.

Por: César Rojas Ángel, periodista, politólogo y realizador audiovisual | Collages: Laura Merchán

Disparos de silencio por muchos frentes

La guerra de hace 20 años no les alcanza a las y los periodistas para describir el fuego cruzado al que se enfrentan hoy.

Si Carlos Pérez no vuelve a Arauca, habrá una voz menos para hacerle seguimiento a la obra del Hospital San Vicente, a la que le acaban de asignar [otros 4.500 millones de pesos](#) desde el gobierno nacional para construir una segunda torre por la que los arauqueños llevan esperando [casi 16 años](#). Si Carlos no vuelve a Arauca, la obra de la Concha Acústica del municipio de Cravo Norte perderá un vedor que se siga preguntando —y le refresque la memoria a sus paisanos— por qué luego de tres años, y más de 2 mil millones de pesos invertidos, [“solo existen unas bases de cemento y un encerramiento en lona”](#).

Si Carlos no vuelve, habrá menos ojos atentos a la Asamblea Departamental de Arauca, donde dice él que el control político es cada vez más escaso, los aplausos a los gobernadores de turno cada vez más largos y las sesiones más cortas. O más “light”, como escribió en una [columna de opinión](#) pocos días antes de que los grupos armados lo pusieran “entre la espada y la pared”.

El pasado 6 de noviembre de 2024, Carlos recibió una llamada. “Le vamos a mandar un video para que lo publique”, le dijeron. Él, que fundó La Lupa Araucana en 2017 con el ánimo de hacer periodismo local, contestó lo obvio: que tenía que ver de qué se trataba el video, si era relevante para su audiencia, si era un asunto prioritario, si cumplía con sus estándares éticos. Pero del otro lado de la línea, un hombre que se identificó como miembro del Estado Mayor Central (una de las disidencias de las Farc) le dejó pocas alternativas: “publique o se atiene a las consecuencias”.

Carmen Rosa Pabón, una de las reporteras más avezadas de Arauca y corresponsal de la FLIP afirma que, para monitorear la situación de libertad de prensa en el departamento, uno de los grandes contrastes con las amenazas de otros años son ese tipo de videos. “Ya no mandan el panfleto sino que mandan editado el video y ahora tienen a sus especialistas, a sus equipos de prensa, sus Youtubers”, dice Pabón y añade que ahora a los actores armados les queda más fácil enviar este tipo de material a los periodistas vía WhatsApp o aplicaciones similares.

Desde hace años los grupos armados, además, cuentan con sus propias plataformas. Cuentas de X (antes Twitter), Facebook, YouTube; canales de difusión en aplicaciones de mensajería (WhatsApp o Telegram, entre otras); y algunos alimentan páginas web. Pero todos estos esfuerzos por impactar en la opinión pública son insuficientes al lado de las capacidades de periodistas y medios que ya tienen un reconocimiento en la población. “La información es muy importante para todos los actores armados”, explica Pabón, pues la usan para dar sus partes de guerra, emitir opiniones políticas o para ejercer presión en ciertos territorios y poblaciones.

Y la presión en esos primeros días de noviembre le tocó a Carlos. Sin darle muchas vueltas, publicó en su noticiero matutino en Facebook el video en el que Luis Felipe Ramírez, alias ‘Pescado’ y cabecilla del frente décimo del Estado Mayor Central, emitía una larga diatriba contra el ELN. Esa noche, Carlos recibió un mensaje del remitente. “Lo vimos”, le escribieron, y Carlos no volvió a saber de esa persona.

Pero luego le llegó un documento desde otro número. En el comunicado, el Frente de Guerra Oriental del ELN señalaba a La Lupa Araucana como “órgano oficial para que se expresen los mercenarios con celeridad”.

En la mañana del 7 de noviembre Carlos abrió su noticiero haciendo evidente la encrucijada. Si no publicaban el material de un actor armado, se exponían a las represalias, y al hacerlo, se convirtieron en objetivo militar de otros actores ilegales. En la emisión de esa mañana,

Carlos puso sobre la mesa algo que muchos otros periodistas han venido replicando este último año en las zonas más apartadas de Colombia: [“Se está repitiendo la misma historia del año 2003”](#).

CAQUETÁ, EL REGRESO DE LAS VACUNAS

Pedro¹ volvió a Florencia, pero solo a Florencia. El periodista solía hacer reportería en todo el Caquetá, pero desde que regresó tras unos meses de aislarse por seguridad, siente que no puede salir de la capital del departamento. Para él no basta con decir que la situación se parece a la que vivieron hace 15 o 20 años.

“Ahora se escudan en que están negociando un cese al fuego”, dice Pedro y agrega que en otras entrevistas los actores armados han dicho “estamos negociando otra cosa menos la extorsión”.

En junio de 2024, Pedro recibió una boleta extorsiva digital de las disidencias de las Farc. Le llegó un martes para asistir a un punto de encuentro el jueves siguiente. Él justo estaba fuera de la ciudad y la ignoró. Le llegó otra y decidió no ir. A la tercera citación tampoco fue. Y como el año pasado ya había visto al menos cinco atentados con granadas en la ciudad, decidió que no era seguro quedarse esperando a que los violentos actuaran y abandonó Florencia con su familia.

“Aquí hay una modalidad en Florencia,” cuenta Pedro. “La guerrilla cita a la gente, les muestran toda su información y si no pagan la extorsión, les piden tres referidos”. En 25 años de ejercicio periodístico, él nunca se había encontrado en una situación similar, pero sabía que solo con asistir iba a poner su integridad física y profesional en riesgo. Si pagaba, se convertía en financiador de grupos armados ilegales, y si no lo hacía, tendría que señalar a alguien más para salir ileso. “Yo creo que a mí me pusieron como referido,” concluye.

La presión de los actores armados también ha llevado a la autocensura. Personas vinculadas al centro de pensamiento A la Orilla del Río también recibieron un par de citaciones similares. Estefanía Ciro Rodríguez, directora de la organización, graduada como doctora con mención honorífica del Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta que esta presión, sumada a otras amenazas dirigidas a ella y su equipo, les llevaron a cambiar el foco del proyecto. “Nuestro trabajo ahora es sobre conservación, sobre talleres y trabajo comunitario de escuela. Y el trabajo periodístico se detuvo”.

Entre otras acciones, el colectivo de investigadores e investigadoras de A la Orilla del Río solía

1. Nombre cambiado por la seguridad del periodista.

hacer análisis sobre el contexto social y político en la Amazonía colombiana. Ciro Rodríguez cuenta que para el cubrimiento de los actores armados del departamento decidieron reservar la identidad de los autores. Pero eso no impidió que amenazaran a uno de ellos, y que le hicieran seguimientos a ella y a su familia. Por su trabajo como académica y analista, Estefanía entra y sale del territorio con mucha frecuencia. Pero sabe que hay muchos líderes que quedan expuestos cada vez que los actores armados hacen un nuevo señalamiento.

Pedro, por su parte, pasó tres meses en Bogotá y contempló irse del país. Pero él y su esposa, que también es su colega, sintieron que no podían dejar atrás el proyecto familiar al que le han invertido todo.

Ahora Pedro piensa que todo hace parte de otra estrategia de censura. Sumada a la incapacidad de moverse por las zonas rurales, a su regreso recibió un mensaje de alguien identificado como miembro del Estado Mayor Central, quien le pidió que publicara un comunicado en su totalidad. “No podemos publicar ese contenido”, contestó Pedro y no volvió a saber más del remitente. Él lo resume en tres movimientos: “ayer fue la boleta extorsiva, luego fue el mensaje de ‘publíqueme esto’, mañana será la presión de ‘no publiquen eso’”.

Las presiones vienen desde tantos frentes que muchas y muchos periodistas, además de verse forzados a huir de sus casas y sus zonas de trabajo, se sienten aislados. Desde Bogotá, a donde se trasladó indefinidamente luego de los señalamientos del ELN en Arauca, Carlos cuenta con la voz entrecortada que apenas un puñado de colegas lo han buscado para expresar su solidaridad.

EL SECTOR PÚBLICO, INSUFICIENTE

Con menos sorpresa, Carlos dice que solo dos de los once diputados de la Asamblea Departamental de Arauca le han expresado su preocupación por el señalamiento que le hizo el ELN y por el desplazamiento al que se vio obligado a comienzos de noviembre. Por esos días, en un foro agropecuario en Arauquita, Carmen Rosa Pabón le cambió el tema al gobernador Rensón Martínez Prada y lo llevó a expresar su rechazo al señalamiento y desplazamiento que sufrió Carlos. Y días después, el alcalde de la capital araucana, Juan Quenza Ramos, se comunicó personalmente con el periodista para expresarle su solidaridad.

Marta Ruiz, periodista y excomisionada de la Comisión de la Verdad, cuenta que estas amenazas ocurren y

quedan impunes porque las autoridades regionales permiten que así sea. “Siempre esos grupos están articulados profundamente a dinámicas legales, generalmente de la política y que tienen que ver con la contratación”, explica Ruiz y añade que las amenazas no ocurrirían si los poderes locales, públicos o privados, rechazarán tajantemente esa persecución.

A propósito, Kyle Johnson, director académico de la fundación Conflict Responses (CORE), resalta que el asunto de los nexos entre estos grupos armados ilegales y las autoridades locales está subestudiado. “Sería un error garrafal pensar que los nexos de autoridades locales y grupos armados han desaparecido”, dice Johnson y añade que es difícil establecer en qué casos los poderes locales buscan a los actores armados para silenciar a la prensa. “No todas las amenazas a periodistas vienen de grupos armados, o la razón no está en haber cubierto orden público. Viene de otras cosas como la corrupción, por ejemplo”.

La excomisionada Ruiz añade que muchos periodistas y líderes sociales resultan amenazados porque “creen que se están enfrentando a un alcalde o a un concejal, y no se dan cuenta que son estructuras criminales y mafiosas muy poderosas”.

Las acciones concretas del Estado también han sido escasas. Pedro pasó tres meses en Bogotá, volvió a Florencia y un par de semanas después el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de la Unidad Nacional de

Protección (UNP) seguía sin evaluar su caso. Al teléfono, un funcionario le lanzó esta premonición: “si acaso le darán un botón de pánico”. Según le dio a entender el funcionario, hace falta un atentado concreto para que el Comité actúe.

Pero algunos analistas consultados para este artículo coinciden en que no sería suficiente un botón de pánico, ni un escolta, ni una camioneta blindada. “Yo creo que lo que hay es una gran soledad y una gran desprotección —dice la excomisionada Ruiz—, y no lo digo solo por los periodistas. Todos esos mecanismos de protección no han servido. Lo que hay que proteger es territorios, no personas, hay que proteger actividades.”

Estefanía Ciro abandonó el proceso con la UNP luego de ser amenazada porque no cree en ese sistema. “Hay una lógica de la necesidad de mantenerse en ese esquema y lo que significa tener un esquema en su objeto de superioridad y de importancia local”, explica a propósito del estatus que supone tener un escolta.



“Si tu eres un líder que se movía en moto y ahora tienes una blindada, y te mueves así con tu familia y todo eso, entonces no te vas a bajar de ese esquema en tu vida,” cuenta Ciro Rodríguez.

Ella dice que en su experiencia ha visto dinámicas similares en Cauca, Nariño y Caquetá, en donde la ruptura de los actores armados se refleja en las organizaciones, y la ruptura de lo organizativo se refleja en los actores armados. “Esto no quiere decir que hay instrumentalización, para nada. Eso quiere decir lo mismo que el concepto de conflicto armado, que esto es una guerra civil también”. Para Ciro Rodríguez, “ahí hay cosas internas en la gente muy complejas, que es lo que hay que sanar.”

¿CON QUIÉN ESTAMOS TRATANDO?

Tanto Carlos como Pedro se remiten al contexto de hace un par de décadas para describir su situación, pero ambos reconocen que ahora el “fuego cruzado” es más complejo.

“Antes uno tenía mediana garantía porque eran grupos que al menos tenían una estructura o algo,” explica Pedro al comparar las guerrillas de antes del Acuerdo Final de 2016 con las de ahora. “Acá todos los días los grupos tienen un cabecilla que se vuela, que se va para otro grupo,” y pone como ejemplo el comunicado que le enviaron para replicar —y que él se negó a publicar— en el que hablaban mal de alias ‘Mordisco’ y apoyaban al Estado Mayor Central. “Son estructuras pequeñas, pero hay muchas, y todas hacen presencia acá”.

“No estamos ante la desaparición de un actor armado —dice Estefanía Ciro Rodríguez sobre la lógica de la guerra luego del Acuerdo—, sino ante unas fracturas muy profundas. Lo que hay ahorita es una especie de Frankenstein que se basa en esas estructuras y en una regionalización de lo que quedaron de ellas”.

A esto se suma la ruptura de las disidencias de las Farc. Ciro Rodríguez pone los ejemplos de las divisiones internas en las estructuras del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. “Ahora no se sabe realmente quién es quién, y en lugar de dos, ahora hay cuatro estructuras que no solo luchan entre sí, sino que además están atacando directamente a la población civil”, concluye Ciro.

En la búsqueda de un punto de referencia, Carlos y otros periodistas han hecho esas comparaciones con los primeros años de la década del 2000. Pero los analistas consultados para este artículo y los mismos reporteros saben que hace 20 años las cosas eran distintas.

Kyle Johnson de la Fundación CORE tampoco cree que se trate de una vuelta al pasado. “En términos



cuantitativos, simplemente las cifras no dan para estar en la guerra de hace 20 años”, apunta. Johnson dice que las tasas de homicidios, así como la cantidad de masacres o secuestros, eran mucho mayores en los primeros años de la década del 2000, pero hay otros eventos que son más difíciles de comparar -porque antes no se documentaban- y que quizá ahora están en aumento, como los confinamientos.

Además, el analista resalta que la atomización de actores ha cambiado radicalmente la naturaleza del conflicto. Johnson explica que la mayor parte de la guerra está ocurriendo entre grupos armados ilegales en una dinámica de todos contra todos. “Hoy en día el conflicto entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública es una parte mínima”, dice. Esto en contraste con los años 2000, cuando las principales acciones ocurrían entre el Estado y las Farc o el Estado y el ELN.

Esto pone en evidencia otro contraste que Johnson explica como un asunto “cualitativo” y que se puede rastrear en la documentación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Antes en Colombia había un conflicto armado interno, en el que participaba el Ejército y otros tres actores armados ilegales (Farc, ELN y AUC). Hoy el CICR identifica [ocho conflictos armados internos](#) no internacionales y está en constante evaluación de nuevos actores. [En 2019](#) [contaban cinco conflictos](#) y ahora Johnson se pregunta si más adelante incluirán a las facciones que se separaron de la Segunda Marquetalia y del EMC. “El conflicto hoy está mucho más fragmentado”, resume.

En Cúcuta, el corresponsal de la FLIP, Cristian Herrera, coincide. “Todos los días nace una banda”, dice. Y el contexto fronterizo acentúa la diversidad de actores. En abril de 2024 asesinaron en esa ciudad al veedor ciudadano Jaime Alonso Vásquez, un activista que se resistía a presentarse como periodista a pesar de alimentar una página de Facebook con sus denuncias de corrupción y asuntos de orden público. Herrera cuenta que por seguridad muchos colegas dejaron de hacer seguimiento a los cabos sueltos que Vásquez venía denunciando.

En septiembre, la Policía Nacional reportó la captura de dos presuntos responsables del asesinato. La pareja pertenecía a una banda identificada como AK-47, un grupo con orígenes en Venezuela que en mayo había declarado a los periodistas de la ciudad como “[objetivo militar](#)”.

Estas y otras acciones también muestran un desprecio creciente de estos grupos por las reglas

de la guerra contempladas en el DIH, apunta la directora de A la Orilla del Río. Estefanía cuenta que en los últimos años han circulado varios videos y fotografías con imágenes explícitas en las que se muestran los muertos producto de los choques entre las disidencias de las Farc y grupos como Los Comandos de Frontera.

“Hace 15 años no se grababa la guerra como se graba ahora —resalta—, no se visibilizaba la guerra y no se usaba el celular como se hace ahora”. Ciro Rodríguez tomó la decisión de no recibir ese tipo de contenidos y llamar la atención de quienes los comparten. “Ahí empecé a darme cuenta que claro, esas imágenes son súper virales en lo local y se vuelven parte de la estrategia de guerra. Hay una sevicia visual.”

Por eso muchos periodistas encuentran difícil comparar estas estructuras ilegales con las guerrillas o grupos paramilitares de hace un par de décadas. “Estos son grupos ilegales de narcotráfico y ya”, le dijo un periodista a la FLIP, a quien no identificamos por su seguridad. Otro analista nos explicó que “hay una presión de esa gente por mostrarse política vía comunicados y videos. Lo que ellos perciben como ser una voz política es hacer un comunicado y tener un logo.” Se trata además de un estatus que necesitan para iniciar una negociación, pero que se contradice con sus dinámicas de persecución a la población civil.

Ahora los violentos rompen las fronteras entre los armados y los civiles. Ahora hasta rompen amistades. En Cúcuta, Herrera cuenta que los actores armados “buscan gente que lo conoce a uno. Entonces llegan los amigos y le dicen a uno ‘mejor no hable de esa gente, quédese callado, póngase a ganar plata, mire aquí le mandaron un regalito’”.

En su celular, Carlos sigue recibiendo mensajes y videos del ELN desde el mismo número del que le llegó aquel comunicado donde vinculaban a su medio con otros actores armados ilegales. No se han vuelto a dirigir a él directamente, pero se siente observado. Carmen Rosa Pabón cuenta que es normal que los periodistas reciban mensajes personalizados de números que tienen fotos de perfil con escudos o personas armadas. El miedo se volvió paisaje. Las amenazas no caducan y las y los periodistas se inventan sus propios protocolos para sentirse más seguros.

Así lo hicieron Pedro y su familia. Luego de descartar el exilio, decidieron volver a Florencia y reorganizar la casa para estar más preparados por si les hacen un atentado.

Carlos ya no sabe qué espera en Bogotá y a pesar de que el riesgo es el mismo, ya fijó una fecha de regreso. Y es que si Carlos no vuelve a Arauca, quién sabe qué será de La Lupa Araucana, qué hará su audiencia, qué pasará con sus colegas arauqueños, caqueteños, antioqueños o de donde sea que algún periodista se haya desplazado para disminuir el riesgo. Si los 18 periodistas que se vieron forzados a abandonar sus territorios en 2024 no vuelven, cualquiera será propenso a sumarse a esa lista. ❖



FOTO: Gabriel Linares

“Naturaleza a mi lado me produce calma. Asai el pescado que pesqué con mis armas. Asai combinado con el grano de mi alma, que néctar encantado, yo quiero de tu palma. Somos la unión de flora sudaca, sembrando y pescando se suda acá”, poema de Alez Dasa, rapero leticiano (2024)



El laberinto de la desprotección y una nueva guerra

La crisis de seguridad que enfrentan las y los periodistas, al igual que otras poblaciones, desnuda por completo los problemas estructurales que tienen las rutas de atención y protección estatales. El mecanismo de protección a periodistas, que en el 2026 cumplirá treinta años y que en sus inicios fue aplaudido internacionalmente por ser el primer sistema de este orden en el mundo, agoniza agobiado por la falta de efectividad, legitimidad y capacidad para cumplir con su objetivo misional.

Por: Daniela Ospina y Jonathan Bock, FLIP.
Collage: Mónica Lequizamón.

En los últimos años se han reiterado incansablemente varios de los graves problemas que tiene la Unidad Nacional de Protección, UNP. La atención de una amenaza, desde que es recibida hasta que se asigna alguna medida de protección, puede tardar entre cuatro y siete meses; medidas completamente inútiles que no atienden a la matriz de riesgo; falta de transparencia en las decisiones de la UNP, denuncias comprobadas de corrupción y otros problemas institucionales. Quizás, el último hito negativo sea el lamentable hecho de que periodistas que contaban con medidas de protección fueran asesinados y que estas no se estuvieran implementando adecuadamente. Así ocurrió en el 2024, en el homicidio de [Jaime Vásquez](#), y en el 2022, con [Rafael Moreno](#).

Otras rutas de atención del Estado a nivel local y nacional también enfrentan una sobredemanda de solicitudes, resultando insuficientes para atender la totalidad de requerimientos de personas que necesitan protección para realizar su trabajo. Esto implica un estado de amenaza latente para la persona que inició el trámite y que después de meses no puede contar con medidas idóneas de protección durante este tiempo.

Encontrar soluciones a la situación actual de violencia contra la prensa en Colombia se ha convertido en un laberinto. En el transcurso de los últimos años este ha sido un asunto debatido intensamente, y se ha visto desfallecer propuestas de reingeniería al sistema de protección sin que esto haya conducido a cambios prácticos. La brújula de la protección sigue enfocada en la atención individual de casos y no en la defensa integral de profesiones que merecen una seguridad especial.

En medio de ese laberinto, las recomendaciones que más escuchan las y los periodistas por parte de funcionarios, colegas y familiares son: “lo mejor es que salga de su ciudad por un tiempo mientras se enfrían las cosas”, “Usted sabe que denunciar no sirve de nada” o “No vale la pena, esa historia no vale una vida”.

“No tenemos herramientas para protegernos porque estos nuevos grupos no tienen las mismas reglas que los de antes. Además, no encontramos ninguna respuesta y no sabemos en qué institución del Estado podemos confiar”, resume un periodista que ha visto el reciclaje de todas estas guerras durante sus treinta años de profesión y que, todavía, busca las palabras para explicar de qué manera se puede justificar a sí mismo seguir ejerciendo el periodismo.

LA PAZ TOTAL TAMBIÉN DEBE BUSCAR LA PROTECCIÓN TOTAL

Dos años después de instalada la política de Paz Total como la principal estrategia y bandera política de la seguridad en Colombia, resulta difícil comprender que persista la ausencia total de un estándar de respeto a la libertad de prensa como un requisito prioritario por parte del Gobierno Nacional.

Las violaciones de la libertad de expresión ocurren principalmente durante los conflictos armados, y así queda en evidencia con las cifras registradas durante el 2024 cuando fueron los grupos armados ilegales los responsables del 73% de las amenazas en contra de periodistas. Esto sucede no porque las reglas internacionales del derecho internacional humanitario sean inadecuadas o desconocidas, sino porque las partes no están dispuestas a respetarlas y existen mecanismos insuficientes para hacerlas cumplir.

La propaganda como arma de guerra es la nueva normalidad en estos conflictos. Así lo entienden varios de los principales grupos armados como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas (ahora Ejército Gaitanista) y los principales grupos disidentes de las FARC.

De esta manera buscan influir en las narrativas durante sus combates con otros grupos. Utilizan las tecnologías de la información y estrategias que eran inimaginables hace solo una década para amplificar sus tácticas de “manipulaciones de información”.

En el horizonte aparece una iniciativa de prevención de las agresiones a la prensa a través de la política pública de garantías a la labor periodística, liderada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Este nuevo intento de formulación, que ya ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Santos, pretende establecer un plan de trabajo en el que autoridades nacionales y locales trabajen para prevenir y actuar de manera eficaz ante agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Esta política representa un esfuerzo importante en el camino del reconocimiento de la violencia contra la prensa, pero esta debe ser articulada con las entidades existentes y atender a las particularidades actuales de este contexto de violencia. Para lograr el objetivo de la prevención, esta política debe necesariamente atajar el círculo de impunidad de los crímenes contra periodistas y ser parte de una estrategia integral con entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.

La protección con enfoque preventivo para la prensa es indispensable en un país con un conflicto activo como Colombia. El efecto más evidente de esta desprotección es la censura, que se vuelve un común denominador en los departamentos con presencia de grupos armados que ejercen un control territorial sobre la población. Sin información se exagera la violencia contra la ciudadanía, quien encuentra pocos espacios para denunciar y reclamar por sus derechos. La desprotección a la prensa resulta en un mayor poder ilegal sobre el territorio que perpetúa los ciclos de violencia en todos los niveles.

EL MENSAJERO, EL OBJETIVO

A continuación, reconstruimos una serie de hitos en tres casos que sirven para ejemplificar algunos de los graves problemas de seguridad que enfrentan las y los periodistas:

Cúcuta

FEBRERO DE 2024

Para ese momento, Norte de Santander era el departamento de Colombia con el mayor número de agresiones contra la prensa en el año. En este mismo mes, Ever Carreño Corredor, alias ‘El Porras’ y líder de la banda criminal identificada como Los Porras, [amenaza a dos periodistas](#) por entrevistar a la Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

ABRIL DE 2024

El 14 de abril es asesinado en la ciudad de Cúcuta el periodista Jaime Vásquez. Para abril de 2024, Norte de Santander seguía siendo el departamento con el mayor número de reportes de agresiones a periodistas. En ese momento, se registraban 17 ataques en contra de periodistas que incluían un asesinato, cinco amenazas, tres acosos, dos obstrucciones al ejercicio periodístico y otras agresiones. Quince de estas fueron en Cúcuta.

MAYO 2024

En un panfleto compartido el 23 de mayo, [la banda criminal AK-47 anuncia un plan pistola](#) contra las y los periodistas de Cúcuta que informan sobre sus actividades, declarándolos objetivos militares. Se incrementa el ambiente de autocensura por parte de quienes hacen reportería sobre seguridad, orden público y corrupción.

SEPTIEMBRE 2024

El 24 de septiembre [se conoce de un plan pistola contra el periodista José Ignacio Arango](#). Para septiembre de 2024, Cúcuta es la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia con un registro de 35 agresiones contra la prensa en esa ciudad, entre ellas 20 amenazas y un asesinato.

OCTUBRE 2024

El 22 de octubre de 2024, el periodista José Ignacio Arango es objeto de reiteradas amenazas a través de mensajes de WhatsApp, videollamadas, panfletos y llamadas telefónicas. Estas intimidaciones provienen de bandas criminales que operan en la ciudad. Dentro de las intimidaciones, el periodista recibe presiones para difundir mensajes de estas organizaciones a través de su medio de comunicación Noticias Cúcuta 75.

DICIEMBRE 2024

Cúcuta cierra el año como la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo. La FLIP registró un total de 59 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. De esta cifra se destacan 33 amenazas y un asesinato.



Arauca

ABRIL 2024

El 5 de abril, el ELN publica un comunicado [acusando a los medios y periodistas](#) que “estigmatizan, criminalizan y asesinan las organizaciones populares, proyectos alternativos y dirigentes sociales”. Además los señala como “verdugos del pueblo” y “cómplices de los planes de las bandas mercenarias de la muerte”. En este comunicado el ELN advierte que agudizará su actuar en contra de la prensa.

JULIO 2024

El 15, 23 y 25 de julio, [el ELN cuestiona y estigmatiza el trabajo de los medios de comunicación locales](#), y les acusa de desinformar y replicar información de las disidencias de las FARC.

SEPTIEMBRE 2024

El Gobierno Nacional decide suspender el proceso de negociación con el ELN después de un atentado de este grupo armado en Puerto Jordán, Arauca.

NOVIEMBRE 2024

[El 5 de noviembre](#), periodistas de La Lupa Araucana son contactados por parte del Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las FARC, quienes les exigen publicar un video en el que se lanza una grave advertencia a varias comunidades rurales del departamento. La presión ejercida sobre el equipo periodístico los obliga a publicar el video en su página. Como consecuencia, el medio recibe recriminaciones por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, que los acusa de simpatizar con la otra organización armada. El medio de comunicación tuvo que suspender sus emisiones como mecanismo de protección.

DICIEMBRE 2024

El departamento de Arauca cerró el año con 45 agresiones contra la libertad de prensa. De estas cifras se destacan 26 amenazas, cuatro estigmatizaciones y tres desplazamientos forzados.

Huila

ENERO 2024

[El 9 de enero](#), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite la Resolución 88 de 2024, a raíz de la solicitud de un grupo de periodistas que fueron amenazados y hostigados por parte de actores armados con control territorial en el departamento del Huila.

ABRIL 2024

Uno de los periodistas beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH [es secuestrado por 24 horas por parte de un grupo armado](#). El secuestro tuvo relación directa con su trabajo periodístico.

JUNIO 2024

Se insiste en la solicitud de reunión para la concertación de medidas de protección otorgadas en la medida cautelar 88 de 2024.

OCTUBRE 2024

Para octubre no se ha definido la reunión para la concertación de medidas de protección de la medida cautelar 88 de 2024. La FLIP insiste nuevamente dada la urgencia para que los periodistas puedan recibir protección en medio de las violencias de control armado en el departamento.

DICIEMBRE 2024

El 3 de diciembre de 2024, la Cancillería convoca a los periodistas beneficiarios de las medidas cautelares a una reunión en la que se pretende concertar las medidas de protección. En dicha reunión no se tienen en cuenta las intervenciones de los periodistas y no se llega a un acuerdo por los errores cometidos en la logística por parte de las entidades encargadas, quienes informaron que no era una reunión de concertación de las medidas sino de información del estado de las mismas. Los periodistas beneficiarios de las medidas otorgadas por la CIDH, en la resolución 88 de 2024, cierran el año 2024 sin poder acceder a un espacio de concertación y por ende, sin las medidas de protección necesarias para que puedan seguir desarrollando su trabajo libre de violencias. ➡



VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN EL 2024:
**un año letal y el más crítico
de la última década**



COLLAGE: Mónica Leguizamón

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
UN AÑO NEGATIVO Y TRÁGICO

Las cifras documentadas de ataques contra periodistas durante 2024 reflejan un récord negativo y trágico. Se registraron un total de 530 ataques dirigidos a 330 comunicadores en todo el país, lo que representa un aumento de 70 casos respecto a 2023. Entre ellos, se incluyen 215 amenazas, 20 casos en los que periodistas se vieron obligados a desplazarse forzosamente para proteger sus vidas, cuatro exilios, dos secuestros y el asesinato de tres comunicadores: dos en Norte de Santander y uno en Sucre. Este es el año más crítico de la última década y confirma que los principales agresores de los periodistas son los grupos armados, que son responsables, en los casos que es posible identificar al agresor, del 73% de las amenazas. Además resalta la tendencia que desde la firma de los Acuerdos de Paz, los ataques mantienen un aumento progresivo cada año.

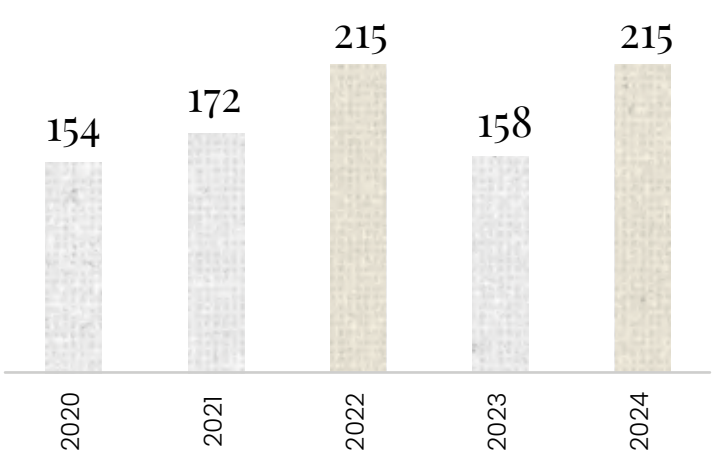
Más allá de las cifras y el impacto individual de estos hechos, este panorama refleja una censura generalizada en varios departamentos y el temor que sienten decenas de periodistas para abordar temas como la contratación local, los vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales, asuntos medioambientales o temas de la política local.

**Principales
agresiones a la
prensa en 2024**

Amenaza	215
Estigmatización	71
Acoso Judicial	43
Acoso	34
Desplazamiento forzado	20
Exilio	4
Asesinato	3

Anatomía de las amenazas contra la prensa

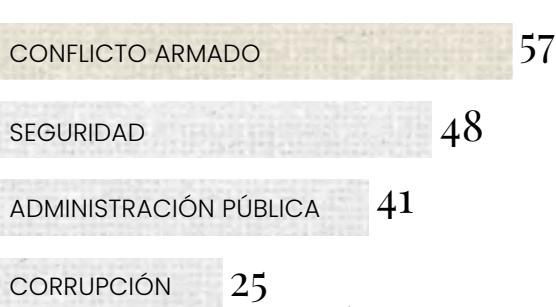
La amenaza continúa siendo una de las formas más comunes de atacar a la prensa. En 2024 registramos 215 casos. Estas intimidaciones estuvieron concentradas en censurar y frenar investigaciones relacionadas al conflicto armado, la seguridad a nivel local y a la comisión de pre-suntos actos de corrupción.



Las personas responsables de este tipo de violencia contra la prensa suelen permanecer en el anonimato para controlar la línea editorial de los medios de comunicación y silenciar a las y los periodistas. En el 43% de los casos, las amenazas se hicieron a través de plataformas digitales y redes sociales. La forma de efectuar las intimidaciones cambia: en ocasiones es vía mensajes de texto o por WhatsApp, mientras que otras ocurren mediante llamadas o videollamadas, en las cuales los agresores mencionan a los familiares de las y los comunicadores.

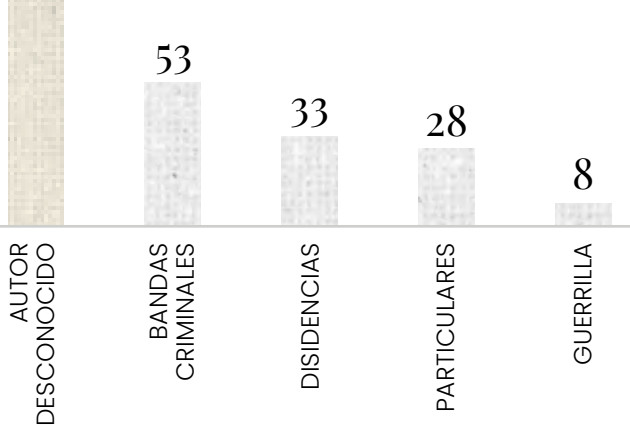
En otros casos, grupos armados publican comunicados advirtiendo que las y los periodistas han sido declarados objetivos militares o anunciando que son blanco de un plan pistola en su contra, como consecuencia de investigaciones que los involucran.

**¿QUÉ TEMAS CUBRÍAN
LAS Y LOS PERIODISTAS
AMENAZADOS?***



* Puede haber más de un tema de cubrimiento relacionado a cada episodio de intimidación

**¿QUIÉN AMENAZÓ A LAS
Y LOS PERIODISTAS?**



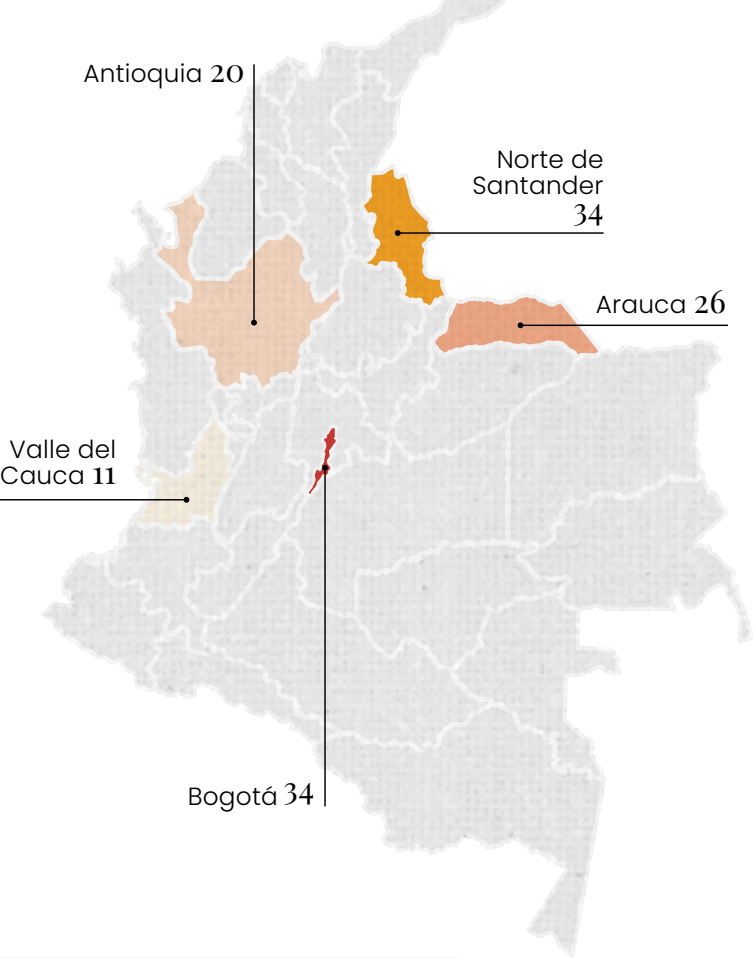
En los casos en los que se pudo identificar el origen de la amenaza, los responsables fueron actores armados en el 73% (94) de los casos. Esto demuestra una estrecha relación entre las intimidaciones y los temas que los periodistas cubrían al momento de ser amenazados: seguridad y el conflicto armado en sus territorios.

Por otra parte, en el 13% (28) de los casos, las amenazas provinieron de particulares, es decir, personas que no ocupan cargos públicos ni roles políticos. La mayoría de ellos (16 de los casos) utilizaron las redes sociales Facebook y X para amedrentar a comunicadores de manera pública. Por ejemplo, [en marzo de 2024](#), un *influencer* hizo comentarios misóginos en sus redes sociales, desacreditando el trabajo de mujeres periodistas. Esto incitó a su audiencia a acosarlas con centenares de mensajes que incluyeron amenazas de muerte y de violencia sexual.

Otras amenazas ocurrieron durante manifestaciones en diferentes ciudades, cuando personas inconformes con la presencia de periodistas o medios específicos, les amenazaron con atacar contra su vida e integridad si no abandonaban el lugar. Esto lleva a que, como medida de prevención, muchos comunicadores eviten identificarse con vestimenta de sus medios y, si son abordados, decir que son periodistas alternativos o independientes.

Las amenazas ocurrieron en 28 de los 32 departamentos del país. Los departamentos en los que no registramos amenazas contra la prensa son Casanare, Meta, Risaralda y San Andrés y Providencia. Aunque históricamente Bogotá suele liderar este registro, al ser la capital y concentrar gran cantidad de periodistas y medios, este año destaca de manera preocupante el caso de Norte de Santander, que nunca había figurado entre los primeros lugares en cuanto a amenazas contra la prensa hasta ahora.

¿DÓNDE SE CONCENTRARON LAS AMENAZAS?



Asesinatos de periodistas en Sucre y Norte de Santander*



Mardonio Mejía
24 de enero, San Pedro (Sucre)



Jaime Vásquez
14 de abril, Cúcuta (Norte de Santander)



Jorge Méndez
27 de junio, Tibú (Norte de Santander)

La violencia letal contra los periodistas Mardonio Mejía, Jaime Vásquez y Jorge Méndez, generó un ambiente de temor y silencio en sus comunidades. Los habitantes de San Pedro, Sucre, perdieron su única fuente de noticias; mientras que los periodistas de Norte de Santander decidieron apartarse de investigaciones sobre corrupción y seguridad, por temor a posibles represalias.

Aunque hay capturas en los casos de Mardonio Mejía y Jaime Vásquez, las investigaciones aún no han permitido esclarecer quién estuvo detrás de los tres asesinatos ni quiénes ordenaron su ejecución. En el caso de Jorge Antonio Méndez, la indagatoria avanza con pocos avances, sin esclarecer aún los responsables.

Los nombres de Mardonio Mejía, Jaime Vásquez y Jorge Méndez se suman a los de otros 165 periodistas que, de 1977 a 2023, han perdido sus vidas por razones vinculadas a su oficio.

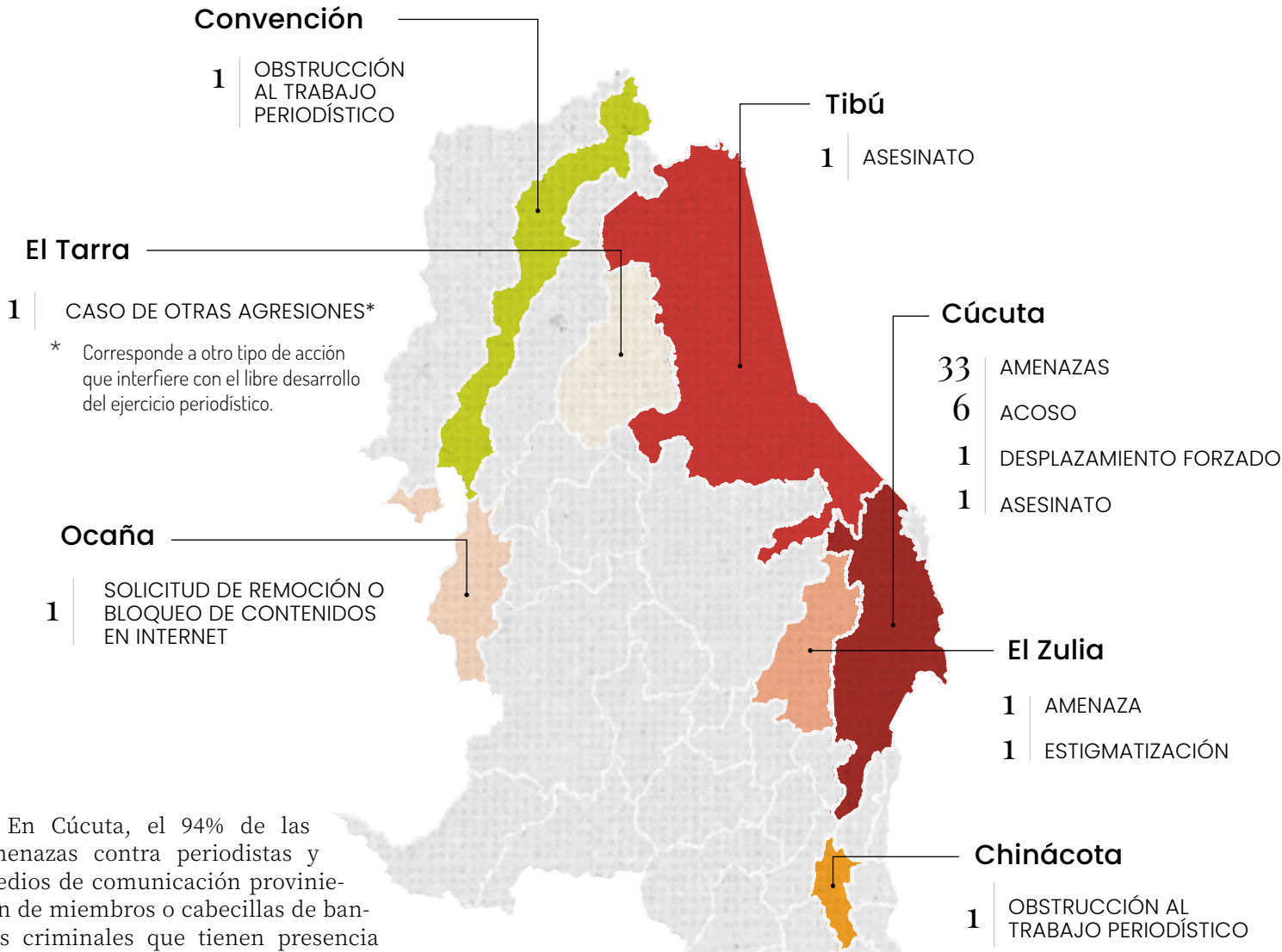
* Durante el 2024 documentamos otros cinco casos de periodistas asesinados que no están incluidos en nuestro conteo porque, hasta la fecha, no hemos podido establecer que el crimen estuviera directamente relacionado a la labor informativa de los comunicadores.

Perfiles completos a partir de la página 28 de esta edición.

Norte de Santander

Con 59 ataques, entre esos dos asesinatos, este departamento alcanzó la cifra más alta de agresiones desde que la FLIP comenzó a reportarlas. El 88.14% de estos incidentes se concentraron en Cúcuta, la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia.

PRINCIPALES AGRESIONES EN EL DEPARTAMENTO



En Cúcuta, el 94% de las amenazas contra periodistas y medios de comunicación provinieron de miembros o cabecillas de bandas criminales que tienen presencia en la ciudad, e incluso algunos operan desde cárceles. Estos individuos advirtieron a los comunicadores que tomarían represalias si continuaban investigando y publicando sobre la situación de seguridad y narcotráfico en el departamento.

En febrero del año pasado, [dos comunicadores fueron amenazados a través de llamada telefónica por alias ‘El Porras’](#), líder de la banda criminal Los

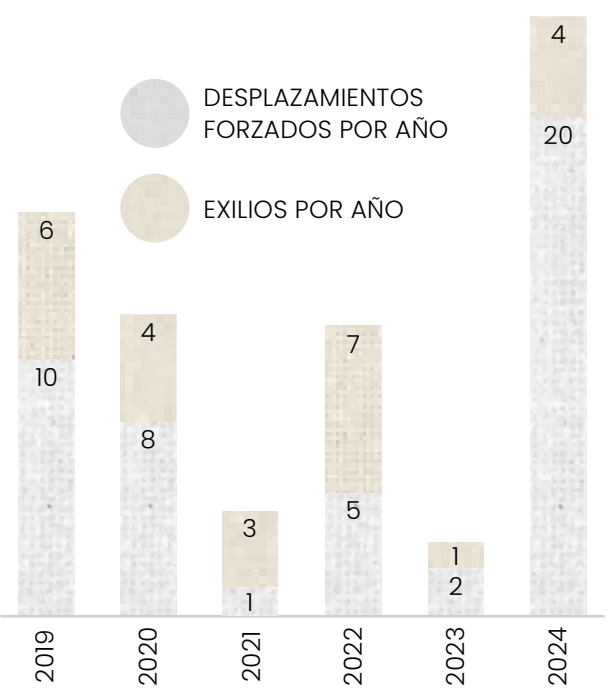
Porras o la ‘Familia P’, actualmente recluido en prisión. El criminal les exigió dejar de mencionarlo en sus publicaciones o, de lo contrario, atentaría contra sus vidas.

En otro caso, [la banda criminal AK-47 envió un comunicado público a varios periodistas a través de WhatsApp](#), anunciando que iniciaría un plan pistola contra aquellos que compartieran información sobre sus actividades delictivas.

Aumento alarmante de desplazamiento forzado

Ante las constantes amenazas y la falta de investigación expedita por parte de las autoridades para identificar y sancionar a quienes intimidan a las y los periodistas, algunos se han visto obligados a suspender sus labores investigativas, mientras que otros se ven obligados a desplazarse, de manera temporal o permanente, a otras zonas del país para proteger su vida.

Durante 2024, documentamos el caso de 20 periodistas (16 hombres y 4 mujeres) de medios de comunicación independientes y digitales que se vieron obligados a salir por falta de garantías de seguridad. Este es el número más alto de desplazamientos forzados que hemos registrado en la última década.



Todos los desplazamientos se dieron luego de que los comunicadores fueran blanco de amenazas y hostigamientos por parte de diferentes grupos armados ilegales como bandas criminales (5), las disidencias de las Farc (8) y el ELN (1). En el 65% de los casos, los periodistas cubrían temas relacionados con el conflicto armado.

[Este es el caso de una periodista antioqueña](#), quien recibió amenazas de muerte por parte de las Autodefensas Gaitanistas después de publicar un reportaje sobre un operativo del Ejército en contra de esta estructura criminal. De manera similar, [otro periodista en Huila se vio obligado a abandonar el departamento tras ser víctima de secuestro](#). Además, tres periodistas de Atlántico, Antioquia y Cesar tuvieron que abandonar sus territorios tras recibir amenazas de muerte, en las que se les exigía salir del municipio en un plazo determinado.

¿DESDE DÓNDE SE DESPLAZARON LOS PERIODISTAS?

Caquetá	4	Arauca	3
Antioquia	3	Tolima	2

ORIGEN DE LAS AMENAZAS QUE CAUSARON DESPLAZAMIENTO

Disidencias de las Farc	8
Bandas criminales	5
Desconocido	7

Funcionarios siguen liderando agresiones contra la prensa

Por cuarto año consecutivo, los funcionarios y servidores públicos se mantienen en el top de agresores contra la prensa con un total de 124 casos. Ha sido recurrente que las agresiones ejercidas sean estigmatizaciones, acosos judiciales y obstrucciones al trabajo periodístico y el acceso a la información; sin embargo, durante el 2024 a estas agresiones se suman cuatro amenazas que se dieron contra periodistas, situación que agudiza la vulnerabilidad en la que quedan las y los periodistas.

Las agresiones de funcionarios se dieron una vez se publicaba o se tenía conocimiento de investigaciones adelantadas por periodistas. Temas como ordenamiento territorial, gestión de recursos para saneamiento en los municipios o el uso del erario en instituciones educativas, fueron algunos de los temas que detonaron las agresiones. Como consecuencia, se mantiene una pretensión de censura por parte de los servidores, lo que afecta gravemente la relación entre prensa y Estado e impide visibilizar y tener un control ciudadano sobre los poderes públicos.

AGRESIONES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS

TOTAL 2024: 124

Estigmatización	66	Otras	5
Acoso judicial	19	Amenaza	4
Obstrucción al acceso a información	10	Violación reserva de la fuente	3
Obstrucción al trabajo periodístico	8	Exclusión	2
Acoso	6	Agresión	1

¿Qué instituciones agreden?

En comparación con el año pasado, se registró un aumento del 44% en la cantidad de agresiones ejercidas por miembros de la rama ejecutiva. Principalmente, alcaldes y gobernadores usaron su posición de poder para estigmatizar la labor periodística. El uso de redes sociales como Facebook y X fueron los medios predilectos de los mandatarios; no obstante, las agresiones también fueron llevadas a cabo en eventos públicos y ruedas de prensa.

Asimismo, desde la Presidencia de la República se registraron agresiones, algunas de las cuales fueron estigmatizaciones directas del Presidente contra medios de comunicación y periodistas.

Los ataques por parte de congresistas también aumentaron: 55% más de casos respecto al 2023. Se mantuvo el patrón de estigmatizaciones, acoso judicial y exclusiones, entre otras, las cuales fueron principalmente cometidas por concejales y congresistas, quienes agredieron a la prensa cuando esta informó temas relacionados con la gestión de los servidores y, en algunos casos, sus vínculos con actos de corrupción. Concejales y congresistas hicieron uso de sus espacios en debates propios para agredir a la prensa.

Estos aumentos contrastan con las agresiones ejercidas por miembros de la rama judicial, con una reducción de más del 50% con respecto al año anterior. Sin embargo, las estigmatizaciones, los acosos y la obstrucción al trabajo periodístico, entre otros, se siguen presentando principalmente por miembros de la Fiscalía General de la Nación; no obstante, es de resaltar que se dio una mejora en la relación de esta entidad con la prensa, pasando de 17 casos en 2023 a 6 casos en 2024. 📌



1. (Alcaldías 41, Presidencia 9, Embajadas 2, Ministerios 2, Gobernaciones 11)
2. (Congreso 10, Concejos 18)
3. (Corte Suprema 1, Juzgado 3, Fiscalía 6)

ASESINATOS A PERIODISTAS: el retorno DE LA **censura** del fuego

ILUSTRACIONES: Rowena Neme

En 2024 fueron asesinados tres periodistas por razones vinculadas a su oficio. Con ellos la lista de reporteros ausentes en Colombia, desde 1977, llega a 168. Aunque las épocas en las que nuestro país encabezaba los listados de homicidios a periodistas en el mundo son lejanas, desde 2017 no ha pasado un año sin que en el reporte anual de libertad de expresión que presenta la FLIP, no se deba lamentar el asesinato de un periodista. Esta censura del fuego es una práctica repetida, que no es solo la forma más implacable de censura, sino la que deja el vacío más profundo en las regiones y el más prolongado en el tiempo.

Estos asesinatos activan la poderosa memoria del miedo a la que se le suma el silencio, no solo para quienes ejercer el periodismo, sino también para quienes son su razón última: las audiencias. Las investigaciones que realizaba Jaime Vásquez quedaron en pausa en Cúcuta, una ciudad que pasó de 13 amenazas en 2023 a 34 en 2024, siendo la más peligrosa para ejercer el oficio en Colombia; Mardonio Mejía, el periodista de la única emisora de San Pedro, Sucre, dejó de hacer su informativo destinado para campesinos, y desde ese momento no tienen fuentes de información periodística; y Jorge Méndez, que quería mostrar una imagen diferente de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, terminó siendo víctima del hocico más oscuro de la muerte, en una subregión donde la violencia no da tregua.



“Buen noticiero. Pero las balas acabaron con su vida. Todos los días lo escuchaba y estábamos informados de lo que sucedía sin salir de casa, más para los que vivimos en el campo”.
Etilbia Hueto

“Sí, extrañamos esa sirena roja que sonaba cuando iba a decir las noticias y uno esperando dé qué o dé quién se trataba. Ya no nos enteramos dé nada”.
Emilce Pineda

“Hoy día hace mucha falta escucharlo, era una costumbre del pueblo levantarse temprano para estar informado”.
Carmen Louss

UN CAMPO QUE AMANECE SIN LA VOZ DE **Mardonio**

Después del asesinato de Mardonio Mejía, director y periodista de Sonora Stéreo, los habitantes de San Pedro, Sucre, perdieron su única fuente de noticias.

Por: Daniel Chaparro Díaz, FLIP

San Pedro es un pueblo pequeño de la subregión de Sabanas en el departamento de Sucre. Aunque queda a una hora de Sincelejo, la principal relación social, cultural y comercial de sus habitantes la entablan con Magangué (Bolívar), que está a 42 kilómetros y una distancia en tiempo equivalente a la que tienen con la capital de Sucre. San Pedro tiene 25 calles que no siguen una cuadrícula exacta con las 18 carreteras que componen todo su perímetro urbano. Según cálculos del DANE, el pueblo debe tener 24.243 habitantes y la mayoría viven, según se estima y reconocen sus pobladores, en el campo. Era a esa mayoría de personas, que habitan San Pedro, a quienes Mardonio Mejía, director y periodista de Sonora Stéreo 94.3 FM, la única emisora del pueblo, les dedicaba su programa de noticias Amanecer Campesino.

Mardonio fue el último de los siete hijos que tuvo doña Emelina Mendoza. Nació ahí, en San Pedro, el 6 de diciembre de 1957, cuando el pueblo era mucho más pequeño y todavía no tenía la mayoría de las calles pavimentadas,

pero ya contaba con casas grandes de fachada en madera, de techos altos y patios generosos. Algunas de esas casas persisten en San Pedro y generalmente están pintadas con colores llamativos. En la que vivía ‘Mardo’, como le decían a Mardonio en el pueblo, estaba pintada de azul. En esa casa creció y regentó la mayoría de los negocios que tuvo. Ahí mismo, el 24 de enero de 2024 a las 6:35 de la tarde, fue asesinado cuando guardaba la moto en el garaje por el que se entra a la emisora.

En las paredes de esa casa cuelgan reconocimientos, diplomas y carnés que recibió Mardonio. Son una variedad de certificados que dan cuenta de una vida activa y en los que se destacan, además del periodismo, la composición de porros sabaneros, las labores de campo y la ganadería, y las dedicadas a la Defensa Civil de San Pedro, de la que fue miembro y fundador a mediados de la década de los 80. De forma empírica, ‘Mardo’ fue aprendiendo todo en lo que se destacó y aportó al pueblo. Con las cámaras de video se obsesionó después de que alguien venido de Chinú grabó unas corralejas en San Pedro. Como un hombre que se fijaba metas para cumplirlas, según cuenta Víctor Chamorro, amigo de muchas aventuras de Mardonio,

quiso tener esas cámaras y aprovechó cuanto viaje hizo fuera del pueblo para conseguir algunas. Grabó cumpleaños, matrimonios, quinceañeros, y también corralejas, fiestas populares, eventos sociales y deportivos. En un rincón de la casa en la que vivía el periodista, se encuentra una estantería con cintas de VHS que contienen, en pequeñas cápsulas de video, al menos dos décadas de la vida cotidiana de San Pedro.

Al deshilar los pasos de Mardonio en el periodismo uno se encuentra con corresponsalías para importantes medios del Caribe como El Universal, El Meridiano, TeleCaribe, entre otros. Pero más allá de ser fuente de lo que pasaba en San Pedro o en la subregión de Sabanas, lo que le interesaba a Mardonio era hacer periodismo para su pueblo, para que los sanpedrinos y sanpedrinas se enteraran de las noticias, de las lejanas y de las propias. Su labor informativa la desarrolló en todos los formatos. Tuvo una productora de televisión: Promej, en la que hizo TeleMardo, el primer programa y canal de televisión del pueblo. También fundó

La Plana, un periódico que se imprimía en Barranquilla y que duró desde 1993 a 1996. Las aventuras con el canal de televisión y el periódico fueron más efímeras de lo que Mardonio quería, pero la emisora comunitaria Sonora Stereo, que creó en esa productiva década de los 90 para el periodismo en San Pedro e impulsada por él, continúa siendo la única emisora del pueblo, pero ahora sin noticias.

Nadie logra precisar el momento en el que Mardonio tuvo la idea de hacer un noticiero exclusivamente para la gente del campo. Lo que sí es claro, es que su relación con el campo se fue afianzando con el pasar de los años, sobre todo desde que tuvo la finca El Rubí, en la vereda La Candelaria, por los lados del antiguo pozo de gas natural, una de las actividades económicas de San Pedro. A la finca iba con frecuencia y en los días de verano lo hacía diariamente, casi siempre después de terminar el noticiero Amanecer Campesino. Así describía su vida asociada a la finca ocho días antes de ser asesinado: “no tengo mucha tierra pero tengo un pedacito de tierra que quiero mucho que se llama El Rubí. Ahí tengo pescados, tengo aves, tengo limones por bastante, tengo cerezas, tengo ciruela, tengo grosella, tengo carnero, vaca lechera, reproductores. Esa es la estancia que yo buscaba en mi vida, ya la tengo. ¿Qué más voy a buscar yo?”.

**

De lunes a viernes, después de los himnos, iniciaba el noticiero que dirigía y presentaba Mardonio. Previamente seleccionaba las noticias que consultaba en diarios y páginas de internet de otros medios. El espacio informativo no solo tenía información foránea sino del departamento y del municipio, con opiniones que Mardonio iba agregando a medida que soltaba las noticias. Pero su sello, lo que realmente lo identificaba frente a otros periodistas que podrían hacer una tarea similar, estaba en la forma de contar la noticia. La gente recuerda sus frases y algunos dichos que lo caracterizaban como “chiví chiví y ron con limón”, que por lo general hacía referencia a una fiesta o cumpleaños, o cuando decía “guarden hielo para mayo”, que dirigía sobre



todo a los gobernantes. No eran solo las frases, propias de su imaginación, sino la entonación que permitían que se colara en la memoria de quienes lo escuchaban de una manera férrea. Esa forma de dar la noticia tan clara para su audiencia, era el eslogan de Amanecer Campesino: “noticias presentadas con un estilo diferente, propio, natural, auténtico y con el verbo nuestro, de la gente de acá de la sabana.”

Dos días después de la muerte de Enilce López, ‘La Gata’, reconocida empresaria del chance, condenada por vínculos con grupos paramilitares y cuyos negocios e influencia política se extendieron desde Magangué a varios municipios del Caribe colombiano, Mardonio Mejía dio la noticia en Amanecer Campesino. Inició hablando de los orígenes del negocio de Enilce López, después de hablar sobre su estado de salud y de su fallecimiento en la Clínica General del Norte en Barranquilla, y luego leyó parte del registro de la noticia en algunos medios, en los que destacaban la carrera criminal de ‘La Gata’. Dio información sobre el rechazo de la JEP en 2022 a Héctor Julio, uno de los hijos de Enilce, por su falta de contribución a la verdad, y recordó que otro hijo de ‘La Gata’, Luis Alfonso López, “está privado de la libertad en casa por cárcel y bajo la custodia del INPEC, por cuenta de una condena de 29 años por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins. Fue en Magangué, ejecutado por paramilitares el 19 de febrero del año de 2005, porque el periodista hablaba de él, hablaba de su mamá, decía verdad, decía mentiras, no me consta, pero dicen y se comprobó que el tuvo la mano metida ahí y por eso lo condenaron a 29 años de cárcel”.

El día que sería asesinado, después de hacer el noticiero, Mardonio salió a una subasta de ganado que se estiró de la mañana a la tarde. Estaba solo en su moto. De regreso, al final de la tarde, cuando estaba entrando la moto en

el garaje que da acceso a la emisora, Ledinwit Yesith Díaz le disparó dos veces, y salió inmediatamente con el conductor de otra moto que lo acompañaba. No se sabe quién era ese acompañante ni quiénes les dieron la orden de asesinar a Mardonio, pero para Angélica Mejía, la hija mayor de ‘Mardo’, el hecho de que hubieran asesinado a su padre a la entrada de la emisora, teniendo oportunidad de hacer-

lo fuera del pueblo, en los desplazamientos habituales que solía hacer, enviaba un mensaje de censura implacable.

Después de ese día la emisora estuvo apagada cerca de un mes y cuando retomó actividades, cuenta Víctor Acosta, quien durante 15 años ha colaborado con labores técnicas en la emisora, hubo gente extraña rondando la casa. En medio de la incertidumbre del por qué asesinaron a Mardonio, tanto Angélica como Víctor

tienen la certeza que quienes dieron la orden lo hicieron por la labor periodística de Mardonio y no por las otras actividades que tenía, y aunque desean recuperar los canales de información de la emisora, la zozobra que rodea el caso impide que San Pedro, y en especial la gente del campo, donde los periódicos no llegan y el internet es débil, tenga de nuevo un amanecer con noticias.

PERO SU SELLO, LO QUE REALMENTE LO IDENTIFICABA FRENTE A OTROS PERIODISTAS QUE PODRÍAN HACER UNA TAREA SIMILAR, ESTABA EN LA FORMA DE CONTAR LA NOTICIA.

¿EN QUÉ VA EL CASO?

Ledinwit Yesith Díaz, el presunto autor material del asesinato, se declaró inocente ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Corozal (Sucre) por la imputación de homicidio simple. La siguiente etapa procesal es el juicio oral que continuará en febrero de este año, en el que la Fiscalía y la defensa continuarán debatiendo sus pruebas para probar la culpabilidad o inocencia de Díaz.

“Gracias por dejar una excelente huella en nuestros corazones. Cúcuta siempre lo va recordar porque fue un hombre ‘berraco’ y sincero, que siempre habló con la verdad”.

Nancy Patricia Jaimes

“¿Quién va a recoger las banderas de Jaime? Necesitamos más personas como él”.

Jac Caobos Cúcuta

“La corrupción celebra y, mientras tanto, la verdad llora, porque cegaron una vida y con ello sembraron el miedo para que nadie se atreva a denunciar”.

Osmany Castellanos Rolón

UNA MUERTE, MUCHOS SILENCIOS:
EL ASESINATO DE

Jaime Vásquez

Por: Ángela María Agudelo Urrego, FLIP

Jaime Alonso Vásquez fue asesinado el 14 de abril de 2024. Desde ese momento, los periodistas de Cúcuta no se atreven a continuar con las investigaciones del veedor ciudadano. Parece que el ejercicio de denuncia impulsado por Vásquez puede quedarse estancado en el tiempo.

Flavio Ernesto Vásquez le heredó varias cosas al menor de sus once hijos: el gusto por ‘pueblear’, por jugar una reñida partida de ajedrez o por disfrutar de un buen libro. Pero Jaime Alonso Vásquez Giraldo conservó una de ellas como un regalo, algo preciado que lo acompañó durante sus 54 años y definió su vida. Heredó de su padre, un columnista político de Barranca, su pasión por la escritura y por la denuncia.

Jaime o ‘El Mono’, como le decían algunos amigos, nació en Medellín, pero la mayor parte de su vida transcurrió en Norte de Santander. Cuando la familia Vásquez vivía en Pamplona, Jaime creó El reelector, un periódico enfocado en los asuntos políticos y educativos del municipio, como las irregularidades en la Universidad de Pamplona o los actos reprochables de varios de sus rectores. En el año 2009, él y su familia regresaron a Cúcuta y aunque Jaime viajaba ocasionalmente a Bogotá para investigar otros temas, su motivación siempre fue hablar de los asuntos políticos de la capital y de Norte de Santander. “A él le quedó eso en la sangre”, cuenta Jaime Andrés, su hijo mayor.

Con el auge de las redes sociales, en el 2014, Jaime creó su página de Facebook. Publicaba videos, documentos y

hacía transmisiones en vivo para hablar sobre corrupción, la política del departamento, los problemas con los servicios públicos y otras irregularidades. Con tono apasionado y elocuente habló de casos de alto interés para las y los nortesantandereanos, como el del hospital Erasmo Meoz o el Programa de Alimentación Escolar impulsado por el gobernador William Villamizar.

Era disciplinado con su rutina. Se despertaba entre las 4 y 5 de la mañana, rezaba el rosario y encendía su computador. Tomaba papel y lápiz, ordenaba los datos, y armaba un pequeño guion. No siempre lo usaba, pues le ganaban la emoción y el ímpetu que todos recuerdan. Tenía una memoria ágil y certera, y relacionaba, sin dudar, nombres, fechas u otros datos útiles en sus denuncias. Jaime Andrés y Daniela, sus hijos, fueron, por un tiempo, testigos de ese día a día. A veces, ejercían como asistentes, y acudían a instalar equipos o solucionar los problemas técnicos.

La sala de su casa era su sala de redacción. Por allí pasaban vecinos y ciudadanos de Cúcuta y otros municipios que le compartían información. También recibía correos o mensajes de cuentas desconocidas quienes, luego de unos días y por la gravedad de la información, preferían eliminar su

rastró. Los hallazgos apuntaban, en su mayoría, a los nombres que ya tenía el veedor en su radar ya que, en palabras de Jaime Andrés, “las ciudades importantes de Norte de Santander están todas bajo, digamos, una misma red política corrupta. Entonces la gente lo veía como un referente. En la calle lo veían con amor y con odio”.

Como retaliación, Jaime recibió varias amenazas que señalaban su trabajo. “Por ahí estoy escuchando que lo quieren joder, pilas”, o “la gente está molesta por lo que se está sacando”, “eso aquí en Cúcuta no se ve bien, porque aquí a la gente la matan por eso”.

Pero Jaime Alonso continuó y decidió hacer públicas esas amenazas. En sus transmisiones mencionó esos mensajes intimidatorios, dejando en claro que no iba a detenerse. “Creo que mi papá sirvió como inspiración para muchos medios independientes que vieron cómo él afrontaba la verdad, que no le tenía miedo a las cosas —dice Daniela—. Él abrió esa puerta para que dijeran ‘Ve, esto sí se puede hacer sin temor a que algo me pase’. Hasta que sí pasó”.

El domingo 14 de abril, y luego de asistir a misa, Jaime caminaba por el barrio La Riviera, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo persiguieron. El parrillero se bajó. Jaime entró a Pasteluchos, un local de comida, y ahí, un sicario le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte. Lo habían seguido, sabían de sus movimientos, pues justo ese día no estaba el guardaespaldas que la Unidad Nacional de Protección le había otorgado desde 2022. El de Jaime, según cifras de la Policía, fue el noveno asesinato de ese fin de semana en Cúcuta.

Hoy muy pocos se atreven a hablar de lo que ocurre en el departamento: atentados, incremento de las extorsiones, narcotráfico, denuncias por corrupción y enfrentamientos entre grupos armados. La prensa ha quedado en medio de esta violencia: tan solo en 2024, se registraron 59 agresiones contra la prensa en Norte de Santander, una cifra que lo convirtió en el departamento más peligroso para ejercer el periodismo.



El escalamiento de las agresiones, la falta de protección a los comunicadores y el asesinato de Jaime son argumentos suficientes para que la prensa se autocensure, especialmente en Norte de Santander. Cristian Herrera, reportero independiente de Cúcuta, lo define como “un marco de referencia para que nadie haga lo que debe hacer un buen periodista, que es investigar y destapar todo lo que pasa en la ciudad”. Ahora, las y los periodistas que aún trabajan allí se mantienen al margen y evitan temas políticos o de orden público. Antes de publicar cierta información, lo piensan varias veces, ya que publicar una noticia podría ponerlos en riesgo su vida o la de sus familias. “Muchos medios se silenciaron y se alejaron del tema”, cuenta Daniela.

Tampoco se atreven a retomar las investigaciones que ya había adelantando Vásquez, pues quienes lo han intentado han sido víctimas de atentados o de amenazas. Incluso, días después del asesinato, varios de sus colegas recibieron mensajes intimidantes. Entonces, si alguien hoy quiere hablar sobre el caso de Jaime o alguna de sus denuncias, los comunicadores prefieren cambiar el tema o no contestar las preguntas, las llamadas o los mensajes de WhatsApp. “Extrañamos mucho a ‘El Mono’ —le dijeron varios conocidos a Jaime Andrés—. Él nos ayudaba y ahora no estamos haciendo nada. Eso está muy triste, muy solo. La gente está asustada”.

Periodistas y ciudadanos se han preguntado qué pasará con las denuncias del veedor. Ni Daniela ni Jaime Andrés tienen la información que trabajó su padre,

pues todos los documentos fueron entregados a la Fiscalía e incluso, días antes de su asesinato, el comunicador le envió varios archivos a Daniel Coronell. Además, muchas de las notas o hallazgos que escribió Jaime aún no aparecen entre tantos papeles o correos.

Ni Daniela ni Jaime Andrés pretenden continuar con las investigaciones de su padre. No viven en Cúcuta, no les interesa el ejercicio periodístico y reiteran los desafíos de una profesión que, como dice Jaime Andrés, “toca muchas fibras y más de la forma como él lo hacía”. El perfil de Vásquez sigue activo, pues la Fiscalía aún está recopilando información para esclarecer el caso y se ha convertido en archivo para ciudadanos y otros periodistas; sin embargo, se quedará estancado en el tiempo o incluso se perderá, pues consideran venderlo.

Ni Daniela, ni Jaime Andrés. Ni Cristian ni nadie en Cúcuta o en Norte de Santander sabe quién pueda continuar con el trabajo de Jaime Alonso o, por lo menos, replicar los datos que alcanzó a obtener. Tampoco qué tanta libertad hay para informar qué ocurre en la ciudad o en el departamento. La prensa local está en medio de un ambiente de violencia, incertidumbre y zozobra, pues el asesinato de un comunicador también rompe el tejido social y evidencia qué tan frágil puede ser el legado de la información si no se garantiza la protección de las voces críticas. “Quedamos muy pocos— advierte Cristian—. Es luchar contra la corriente porque uno se siente solo cuando todo el mundo es silenciado”.

¿EN QUÉ VA EL CASO?

El pasado 8 de diciembre de 2024, [la Fiscalía anunció](#) la condena de Gustavo Alexander Corredor, alias ‘El Enano’, integrante del grupo AK-47, una organización ilegal al servicio del Tren de Aragua y que fue contratada para asesinar a Vásquez Giraldo. Se comprobó que alias ‘El Enano’ realizó labores de vigilancia e informó todos los movimientos del veedor a los autores materiales del crimen, y que recogió el dinero para pagarle a los involucrados.

La Fiscalía también judicializó recientemente a alias ‘El Cojo’, señalado de disparar y causarle la muerte a Vásquez, y a Linda Yesbel Araque, alias ‘Yoqui’, quien presuntamente condujo la motocicleta en la que el sicario huyó.



“Acabaron con la vida de un hombre justo y con gran valentía, pero queda un legado con el cual ustedes, pueblo maravilloso, deben de seguir y es el de dar un buen ejemplo, [...] todos ustedes hicieron parte de la obra que este gran hombre hizo”.

Uriel Ávila

“No lo conocía pero veía sus videos desde la distancia y me gustaba su berraquera como buen catatumbero. Fortaleza a la familia y paz en su tumba de un luchador por el pueblo”.

Manuel Martínez Vargas

Jorge Méndez:

LA IMAGEN DIFERENTE QUE AMORDAZARON EN LA GABARRA

Por: Cristian Mora Jiménez y Felipe Rojas Riaño, FLIP

El 29 de junio de 2024, los habitantes del corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, cumplían dos días de espera a la entrada del pueblo. Quienes estaban presentes esa tarde, recuerdan la incertidumbre y el sol agobiante. Por fin, a lo lejos se dibujó la figura de un vehículo. En su interior regresaba el cuerpo de Jorge Antonio Méndez y tras él, un cielo gris y un encortinado de lluvia que acompañó a la procesión que, entre sollozos, bocinas y pancartas, despedía al periodista comunitario que había dedicado los últimos cuatro años de su vida a cambiar la percepción de violencia que existe de su tierra.

Jorge o 'Jeykon', como era apodado, fue el segundo de cinco hijos que crecieron pescando y jugando a las orillas del río Catatumbo. Desde pequeño, su familia reconoció su gusto por grabar todo lo que pasaba a su alrededor. Pronto se volvió costumbre verlo con un micrófono en una mano y una cámara en la otra entrevistando a las personas y animando toda clase de eventos.

Su sentido de pertenencia por el territorio y las vivencias derivadas del conflicto fueron algunas de las razones que lo motivaron a fundar en 2020 La Gabarra con una imagen diferente, una página de Facebook con la que 'Jeykon' quería cambiar el imaginario colectivo que existe sobre el lugar. La página empezó a crecer gracias a las publicaciones en las que mostraba el día a día del corregimiento y destacaba sus aspectos como las iniciativas para apoyar a personas de bajos recursos o en condición de discapacidad, los emprendimientos o las denuncias sobre el mal estado de las vías o la contaminación ambiental de la zona. Así construyó una comunidad de 645 mil seguidores que apoyaban el periodismo local de Jorge y lo convirtieron en una figura querida y respetada por sus habitantes.

Su familia piensa que el liderazgo social de 'Jeykon' fue una especie de herencia: la del abuelo, don José Simeón Pardo, un campesino del Cesar que, por las denuncias que hacía en defensa de la población, recibió amenazas que lo llevaron a dejar sus tierras; y la del padre de Jorge, Manuel Antonio Méndez, quien asistía a las Juntas de Acción Comunal de La Gabarra y adelantaba proyectos para la comunidad.

Manuel fue un campesino dueño de una pequeña parcela en la zona rural de La Gabarra, donde cultivaba plátano y criaba el ganado junto a su esposa e hijos. Asolados por las incursiones paramilitares de finales de los 90 y principios de los 2000, optaron por irse a vivir al pueblo buscando un mejor futuro.

Esa sucesiva cadena de desplazamientos forzados y los liderazgos de su

padre y abuelo, pudieron ser determinantes para que el trabajo de 'Jeykon' se centrara en cambiar la imagen del corregimiento y hacer visibles sus problemáticas, su objetivo siempre fue pensar en pro de las y los gabarrenses, en sus propias palabras, "si no destapamos las cosas, si no decimos las cosas como son, siempre se van a comer lo que envían y no va a llegar nunca nada".

Sus cubrimientos, enfocados en el trabajo social y la denuncia desde la pedagogía, llevaron a Jorge a descubrir irregularidades relacionadas con corrupción e inadecuada gestión de los recursos públicos. "Hacer cosas donde hay un control absoluto de los grupos armados es complejo, 'Jeykon' llega a una zona a marcar una diferencia y eso de pronto no gusta", expresa Geovanny Mejía, corresponsal de la FLIP en Catatumbo. "Nadie se imaginaba que se fueran a meter con él, no señalaba a nadie: mostraba cosas, hacía sus campañas, pero esas campañas incomodan", agrega el periodista sobre una región que se juega la vida entre el abandono estatal, las masacres, los desplazamientos, los asesinatos selectivos y las disputas de diversos actores armados por los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico.

Pese a ello, uno de los proyectos más aplaudidos de 'Jeykon' fue el de arreglar el puente a la entrada de La Gabarra. Gracias a su gestión, el puente logró ser iluminado y recibir una nueva capa de pintura con los colores de la bandera de Colombia. El día de su inauguración, los registros que 'Jeykon' hizo dan cuenta de la gran acogida y el agradecimiento que sintieron los habitantes.

Tras la restauración, el periodista comunitario soñaba con instalar una placa con la inscripción "La Gabarra con una imagen diferente" a la entrada del puente; sin embargo, nunca pudo verla. El 27 de junio de 2024, el cuerpo de 'Jeykon' fue hallado con impactos de bala y signos de tortura en la vereda La Florida, muy cerca de la vía que comunica el casco urbano de Tibú y Cúcuta.

SUS CUBRIMIENTOS, ENFOCADOS EN EL TRABAJO SOCIAL Y LA DENUNCIA DESDE LA PEDAGOGÍA, LLEVARON A JORGE A DESCUBRIR IRREGULARIDADES.

Desde entonces los cinco golpeitos que daba en la puerta de la casa de su mamá para anunciar su llegada no volvieron a escucharse, ni tampoco las trovas improvisadas que hacía en sus transmisiones. "Él intentó demostrar que se podían hacer obras sociales, que unidos se podía ayudar a muchas personas, que se podía arreglar el pueblo y ponerlo bonito. Intentó mostrar esa cara gentil del pueblo, pero a la hora de la verdad terminó ganando fue la guerra", recuerda uno de sus familiares.

Seis meses después de su muerte, las autoridades aún no han determinado quiénes son los autores materiales ni intelectuales; no obstante, desde la Fiscalía General de la Nación se tienen fuertes indicios de que su labor periodística y comunitaria es el motivo por el que fue asesinado.

Aunque su página La Gabarra con una imagen diferente perdió a su protagonista y el pueblo se quedó sin una valiosa fuente de información y de periodismo como un elemento transformador, esta se resiste a desaparecer. "Son recuerdos que nos mantienen vivos y el hecho de entrar y mirar todos los videos que hizo, todas sus obras sociales, para nosotros es muy gratificante, nos enorgullece. (...) No queremos perder eso y más porque soy una conocedora de que él amaba esa página y no voy a dejar que se pierda", afirma una de las custodias del sitio web.

Esa misma violencia que 'Jeykon' luchó por disipar y que paradójicamente finalizó con su vida, la misma que enfrentaron su padre Manuel

Antonio y su abuelo José Simeón, es la misma que para principios de 2025 ha desencadenado una nueva crisis humanitaria en el Catatumbo, como consecuencia de los combates entre las disidencias de las Farc y el ELN y que ha dejado miles de personas desplazadas, y un número incierto de personas desaparecidas y asesinadas, como si esa mancha de la guerra sobre su tierra se resistiera a abandonarla. ❖

CONSONANTE LLEGA A INÍRIDA

Desde febrero, cuatro periodistas locales reportearán las historias de la capital del Guainía. Este lugar, considerado un paraíso amazónico, tiene una población pluriétnica y de mayoría indígena donde se hablan más de 15 lenguas. Es el hogar de la flor de Inírida, una de las más de mil especies de flora, y de 900 especies de fauna. Allí, los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo le dan vida al Orinoco en la estrella fluvial.

Escanea el QR y recibe actualizaciones diarias con noticias sobre Guainía, La Guajira, Chocó, Amazonas y Caquetá directo en tu WhatsApp.



@consonante_lab

www.consonante.org

CONSONANTE

¿Qué significa **ceder o no** ante el miedo, la presión o las amenazas?

LA ULTIMA

DESPÍIES DE



Ilustración: Julián Solano

SERIE | E2

De la denuncia al exilio:
la historia de El Periódico de Valledupar



Episodio anterior

El asesinato de Jaime
Vásquez: impunidad
y silencio en Cúcuta



LA CENSURA

En la nueva serie de Perifoneo revelamos **las consecuencias del silencio impuesto a la prensa** en diversas regiones de Colombia.

DISPONIBLE EN

